



U

A

H

# EL TRABAJADOR AUTÓNOMO ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTE

## The Economically Dependent Self-Employed Worker

Presentado por:

**D<sup>a</sup> LIDIA HERRERA LÓPEZ**

Dirigido por:

**D. JOSÉ LUIS GIL GIL**

Codirigido por:

**D. JOSÉ RAFAEL GARCÍA DE LA CALLE**

Alcalá de Henares, a 8 de marzo de 2021

“Un emprendedor es alguien que tiene  
una visión de algo y quiere crear”

David Karp

**RESUMEN :** A través del presente Trabajo de Fin de Máster se realiza un análisis del régimen jurídico del trabajador autónomo económicamente dependiente, destinado a observar la dependencia que presentan ante el cliente principal y su actual regulación en la Ley 20/2007.

Este estudio da cuenta de la dificultad en la concreción del régimen jurídico aplicable y se delimita el concepto de trabajador autónomo económicamente dependiente desde sus características teniendo en cuenta su nueva regulación y la jurisprudencia en la materia.

**ABSTRACT:** The present End of Studies Essay carries out an analysis of the judicial regime of the Economically dependent self-employed, with the objective of maintaining the dependency that they present to the main client and its current regulation in Law 20/2007.

The present studies try to show up the difficulty between the applicable legal regime and delimits the concept of economically dependent self-employed worker from its characteristic taking into account its new regulation and the jurisprudence on the matter.

**RESUM:** Ce travail réalise une analyse du régime juridique des travailleur autonome dépendant économiquement, afin d'observer la dépendance qu'ils présentent devant au client principal et sa réglementation actuelle dans la loi 20/2007.

Cette étude montre la difficulté de préciser la régime juridique applicable et le concept de travailleur autonome dépendant économiquement est délimité de ses caractéristiques en tenant compte de sa nouvelle réglementation et jurisprudence en la matière.

**Palabras clave/ Key-words:** Autónomo económicamente dependiente, cliente principal, contrato de trabajo, Ley 20/2007, acuerdos de interés profesional

INTRODUCCIÓN .....	3
1. TRABAJADOR AUTÓNOMO ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTE .....	5
1.1. Concepto y características .....	5
1.2. Requisitos .....	8
1.3. Dependencia económica .....	17
1.4. Excepciones configuración general del TRADE .....	19
2. REGULACIÓN JURÍDICA .....	24
2.1. Contrato entre el cliente principal y el TRADE .....	24
2.1.1. Jornada actividad profesional.....	29
2.1.2. Extinción contractual .....	31
2.1.2.1 Indemnización .....	34
2.1.3. Interrupción justificada actividad profesional .....	35
2.2. Los acuerdos de interés profesional .....	39
2.2.1. Sujetos .....	40
2.2.2. Forma AIP .....	43
2.2.3. Procedimiento de solución de conflictos colectivos .....	49
2.2.4. Sentencia PANRICO .....	50
2.3 . Competencia jurisdicción social .....	52
CONCLUSIONES .....	59
BIBLIOGRAFÍA .....	61

## **INTRODUCCIÓN**

La figura del trabajador autónomo no fue regulada formalmente hasta el año 2007, si bien, antes existían ciertas referencias en la CE tales como “la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado<sup>1</sup>” que no abarcaban únicamente al trabajador por cuenta ajena, sino que de manera implícita englobaba al trabajador por cuenta propia, es decir, al considerado trabajador autónomo. También es necesario reseñar la importancia que tuvo el Decreto 2530/1970 que reguló el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, para la posterior creación del Estatuto del Trabajador Autónomo.

La promulgación de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, en adelante LETA, entró en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE, es decir, el 12 de octubre de 2007; esta sirvió para dotar a este colectivo de *una norma básica* a partir de la cual se establecería un marco general y unitario; además, reconocería la figura del trabajador autónomo, y en especial, la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente. No obstante, el objeto principal de esta ley era dar seguridad jurídica a una situación de hecho que venía dándose.

Los países que forman parte de la Unión Europea tampoco disponían de regulación sobre la figura del trabajador autónomo, siendo España el primer país en regular esta figura con la LETA, señalando así el preámbulo de esta ley “la importancia que tiene el presente Proyecto de ley, pues se trata del primer ejemplo de regulación sistemática y unitaria del trabajo autónomo en la Unión Europea, lo que sin duda constituye un hito en nuestro ordenamiento jurídico”.

En España, en octubre de 2020 el número de trabajadores autónomos era de 3.279.261, en cuanto al género de los trabajadores, los hombres representaban 2.095.025 y las mujeres 1.174.646; frente a 15.711.103 trabajadores por cuenta ajena<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Constitución española, en su artículo 38.

<sup>2</sup>Ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones. Afiliados por medios por actividad económica y Cuenta Ajena o Propia. Ajuste estacional. Disponible en línea en “ <http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/est8/est10/est290/est292/est293>”

Dentro de este texto legal se crean dos estatutos jurídicos distintos: el trabajador autónomo económicamente dependiente, en adelante TRADE, y el trabajador autónomo clásico. La diferencia principal estriba en la cuantía de los ingresos por rendimientos del trabajo y de actividades profesionales, teniendo así el trabajador la consideración de económicamente dependiente si el cliente principal aporta un 75% de sus ingresos.

No obstante, existen diferentes sectores dentro de este colectivo al realizar actividades diferentes, aun así todos están incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA). La administración los divide en seis grupos distintos: 1. trabajadores autónomos, dentro de este grupo estarían los autónomos que cotizan por actividades empresariales, y por otro lado, los artistas y deportistas; 2. profesional autónomo o freelance, dentro de este grupo estarían los profesionales colegiados, y los profesionales no colegiados; 3. autónomo societario ; 4. autónomo en régimen agrario; 5. autónomo colaborador ; 6. autónomo económicamente dependiente.

En esencia, la figura del trabajador autónomo está muy presente en la sociedad, debido a que es una forma empresarial muy fácil de constituir. Se considera trabajador autónomo a aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo sin sujeción por ella a un contrato de trabajo y pese a que utilice el servicio remunerado de otras personas<sup>3</sup>.

Existen determinadas características comunes que abarcan a todo el colectivo, entre otros el régimen profesional común del trabajador autónomo, en el que se estipulan sus derechos y sus deberes profesionales, así como el contenido y alcance en relación a cada grupo distinto según especifique su normativa.

A continuación, analizaremos la figura del TRADE estudiando sus características, su regulación jurídica, y relación con el cliente principal, sin olvidarnos de los acuerdos de interés profesional.

---

<sup>3</sup>Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, artículo 2.

## **1. EL TRABAJADOR AUTÓNOMO ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTE (TRADE)**

### **1.1. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS**

Para que un trabajador pueda ser considerado trabajador autónomo económicamente dependiente (en adelante TRADE) primero tiene que cumplir con los requisitos establecidos para ser autónomo, así se establece en el artículo 1.1. LETA que “las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. Esta actividad autónoma o por cuenta propia podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial”. De esta definición podemos extraer la conclusión que *el TRADE es un autónomo con particularidades*, de ahí que en el artículo 1.2. LETA se declaren comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley los TRADE.

En el capítulo III de la LETA se aborda en profundidad el análisis del régimen profesional del trabajador autónomo económicamente dependiente, desde su artículo 11 hasta el 18 inclusive. Siendo necesario remitirnos con carácter supletorio a otras normativas como por ejemplo, la Ley 36/2011 y, el RD 197/2009, que completan la figura del TRADE entre otras.

El artículo 11 LETA podemos dividirlo en tres partes, ya que en cada una de ellas regula un ámbito distinto del TRADE: el primer apartado (11.1) define la noción trabajador autónomo económicamente dependiente, en el segundo apartado (11.2) establece los requisitos que tiene que congregar el trabajador para ser considerado TRADE, y en el tercer apartado (11.3) abarca las exclusiones.

“Los trabajadores autónomos económicamente dependientes son aquéllos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75 por ciento de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales.” estableciendo así el artículo 11.1 LETA.

La finalidad principal del anterior artículo consiste en construir la figura del TRADE, pese a que esta figura sea muy restrictiva por sus condiciones limitativas, incorpora elementos específicos del trabajador autónomo para así poder integrarle en su régimen profesional, tales como la realización de una actividad económica a título lucrativo, de forma habitual personal y directa. Pese a la inclusión en su régimen profesional, hay una gran diferencia entre ambas ocasionada por la nota distintiva de independencia económica del trabajador autónomo, debido a que el TRADE tiene que obtener el 75% de sus ingresos de un cliente principal (que no un cliente único) chocando esto con la independencia económica propia del trabajador autónomo.

No obstante, los elementos comunes que concurren entre ambas hacen posible que el TRADE sea considerado *un trabajador autónomo más* pero con particularidades, siendo necesario que concurren en su figura los requisitos del trabajador autónomo del artículo 1.1 LETA, y los propios del TRADE del artículo 11 LETA.

Respecto a la cuestión planteada acerca de los requisitos que tiene que cumplir un trabajador autónomo para ser considerado TRADE, en relación con el vínculo de dependencia del TRADE hacia su cliente principal, nos encontramos con la Sentencia del Tribunal Supremo 2924 (recurso 4746/2019) del 25 de septiembre de 2020 que confirma la relación de laboralidad entre la empresa Glovo y sus repartidores.

La empresa GLOVO actúa como intermediario entre los distintos comercios y la correspondiente contratación de transporte de mercancías por carretera, esta labor se realiza a través de plataformas informáticas mediante las cuales distintos comercios ofertan sus productos en una app diseñada por la empresa, para que finalmente el consumidor final pueda recibir el producto, que suelen ser alimentos preparados, en su domicilio. Este servicio de transporte se realiza por los denominados “glovers”, es decir los repartidores, estos tenían que reservar franja horaria para trabajar y activar la ubicación en su teléfono móvil, para así poder realizar los encargos que aparecían en la app de Glovo, pudiendo elegir los repartos los pedidos que quieren llevar a cabo.

En esta sentencia se profundiza sobre varios temas: primero, si constituye una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, rechazando el TS esa cuestión precisando que “no existen dudas razonables en la aplicación del derecho ... para que se eleve la



cuestión prejudicial ” ; segundo: examinar si concurre el requisito de contradicción e incongruencia entre la sentencia recurrida y la de contraste; tercero: valorar la posible relación laboral entre el repartidor de Glovo, que ostenta la condición de TRADE y la empresa (Glovo) , centrándonos en este último punto.

Para determinar si existe una relación laboral entre ambos tenemos que atender a las notas definitorias del contrato de trabajo (voluntariedad, ajenidad, subordinación o dependencia y remuneración); como también a la directiva 2003/88/CE la cual establece que “se excluye de ser considerado trabajador a una persona contratada por su posible empleador en virtud de un acuerdo de servicios que estipula que es un empresario independiente si esa persona dispone de facultades... El TJUE establece dos salvedades; que la independencia de esa persona no parezca ficticia y que no sea posible establecer la existencia de una relación de subordinación entre esa persona y su supuesto empleador".

Así pues, si la dependencia del repartidor es simplemente ficticia, la directiva no será aplicable para la calificación de la relación laboral. Para atender a la nota de dependencia hay que valorar cada relación laboral de manera individualizada, “valorando el margen de autonomía del que goza quien presta el servicio”.

El TS estima la existencia de la relación laboral por diversos factores tales como: primero, el repartidor no realiza la actividad con sus propios criterios organizativos, sino que obedece a lo fijado por glovo, chocando esto con lo que establece el artículo 11.2 LETA; segundo, la infraestructura principal (la app) la poseía glovo, siendo esta esencial para que el repartidor pudiera prestar el servicio; tercero, “la elección de la franja horaria estaba claramente condicionada” debido a que dependiendo de la hora que se trabajase los ingresos iban a ser mucho mayores; cuarto, “glovo tomaba todas las decisiones comerciales” por lo tanto, no se producía el requisito de ajenidad, siendo los consumidores finales y los comercios clientes de glovo, y no de los repartidores.

Dándose todos los requisitos anteriormente expuestos el Tribunal Supremo llega a la conclusión de que existe una relación laboral entre ambos, enfatizando en que el repartidor no hubiera podido realizar su trabajo en calidad de autónomo sin los medios instaurados por glovo, siendo este quien tenía el control de la empresa, siendo es uno de los requisitos del artículo 11.2 c) LETA para ser considerado TRADE. Así pues se trataría de una relación laboral y no un contrato entre glovo y un trabajador autónomo<sup>4</sup>.

Por último, la LETA no recoge una previsión de lo que ocurriría si el trabajador pierde la consideración de TRADE y no se lo comunica al cliente, ya sea por desconocimiento o debido a que dicho estado le resultaría más ventajoso. En el caso de que el cliente se enterará de que ha perdido tal condición, esta legitimado para dejar de aplicar el régimen jurídico regulado en el capítulo III de la LETA para los trabajadores autónomos económicamente dependientes; y por lo tanto se produciría la extinción de contrato entre ambos, regulada en el artículo 16 LETA, y que trataremos más adelante.

## 1.2. REQUISITOS

El TRADE, además de mantener una relación de dependencia económica hacia su cliente principal por percibir de este un 75% de sus ingresos por rendimiento del trabajo y de actividades económicas o profesionales, debe de cumplir una serie de requisitos adicionales; estableciendo así, el artículo 11.2 LETA que para el desempeño de la actividad económica o profesional como TRADE, éste deberá reunir simultáneamente las siguientes condiciones:

- a) *“No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o toda la actividad con terceros, tanto respecto de la actividad contratada con el cliente del que depende económicamente como de las actividades que pudiera contratar con otros clientes, si bien con particularidades*

---

<sup>4</sup>Rojo, E. (2020). Pues sí, la saga Glovo (y los glovers) merecen un caso práctico. Notas a la sentencia del TS de 25 de septiembre de 2020, que declara la laboralidad, y recordatorio de las sentencias del JS núm. 39 de Madrid de 3 de septiembre de 2018 y del TSJ de Madrid de 19 de septiembre de 2019(y II).El blog de Eduardo Rojo.[http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/10/pues-si-la-saga-glovo-y-los-glovers\\_2.html](http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/10/pues-si-la-saga-glovo-y-los-glovers_2.html)

- b) *Ejecutará su actividad de manera diferenciada con los trabajadores que presten servicios bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente.*
- c) *Dispondrá de una infraestructura productiva y de materiales propios, necesarios para el ejercicio de la actividad e independientes de los de su cliente, cuando en dicha actividad sean relevantes económicamente.*
- d) *Desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas que pudiese recibir de su cliente.*
- e) *Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de acuerdo a lo pactado entre ambos (cliente y TRADE) asumiendo el riesgo y ventura de la actividad”.*

En relación al artículo 11.2 a) LETA, el TRADE no podrá contratar o subcontratar a ningún trabajador por cuenta ajena, siendo él el único que puede realizar toda o parte de la actividad profesional ; esta restricción no afecta únicamente a la relación laboral que tiene con su cliente principal, sino que se extiende a todos los clientes con los que tenga una actividad laboral contratada. Así pues, “el TRADE no puede llevar a cabo ninguna acción que implique una descentralización productiva de su actividad”<sup>5</sup>.

Este criterio viene amparado por la definición del autónomo clásico, al cual se le exige que la actividad profesional se realice de forma habitual, personal y directa, por lo que si el TRADE pudiese contratar o subcontratar a otro trabajador por cuenta ajena para que realizase su actividad laboral solo sería un mero intermediario, y no ejecutaría el encargo realizado por el cliente.

No obstante, existen cinco supuestos excluidos de la prohibición de contratar a un trabajador por cuenta ajena, permitiendo al TRADE tener a su cargo a un único trabajador cuando concurren las circunstancias que establece el artículo 11.2.a) LETA:

1. *“Supuestos de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve meses.*
2. *Períodos de descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento familiar.*

---

<sup>5</sup>Aguilar Martín,M.(2015) El régimen jurídico del trabajador autónomo económicamente dependiente (1ª ed.).Editorial Comares, cita página 77.

3. *Por cuidado de menores de siete años que el TRADE tenga a su cargo.*
4. *Por tener a su cargo un familiar; por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, en situación de dependencia, debidamente acreditada.*
5. *Por tener a su cargo un familiar; por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, con una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debidamente acreditada”.*

En estos supuestos, no se prevé que ocurrirá cuando el TRADE sufra una contingencia por un accidente o una enfermedad, no pudiendo contratar a nadie para que continúe la actividad profesional que estaba desarrollando. En consecuencia, el encargo consignado al TRADE estará interrumpido hasta que este pueda retomar la actividad cuando sea dado de alta por los servicios de salud, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el contrato individual o lo establecido en el AIP correspondiente. Es necesario reseñar, que esta situación está catalogada como causa justificativa de la interrupción laboral por el artículo 16.1.d) LETA, pero sin la posibilidad de contratar a un trabajador por parte del TRADE para que desarrolle la actividad en ausencia de este.

La prohibición de contratar o subcontratar a trabajadores por parte del TRADE incluye tanto a trabajadores por cuenta ajena, como a familiares; este requisito se exige durante toda la relación laboral, es decir, se tiene que llevar a cabo desde el inicio de la actividad laboral hasta el final, al menos mientras sea considerado TRADE<sup>6</sup>.

En los supuestos especificados (en los números 3, 4 y 5) de cuidado de un menor de siete años que tenga a su cargo el TRADE, cuando tenga a su cargo a un familiar dependiente y cuando este familiar tenga una discapacidad igual o superior al 33 por ciento “el contrato se celebrará por una jornada equivalente a la reducción de la actividad efectuada por el trabajador autónomo sin que pueda superar el 75 por ciento de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable, en cómputo anual” estando vinculada “la duración del contrato al mantenimiento de la situación de cuidado del menor de 7 años, o de la persona en situación de dependencia o discapacidad a cargo del trabajador autónomo, con una duración máxima, en todo caso, de doce meses. En los casos que existiera más de un menor de siete años o familiar en situación de dependencia o discapacidad solo se podrá contratar a un trabajador por cuenta ajena por cada persona”.

---

<sup>6</sup>Aguilar Martín, M. C. (2015) El régimen jurídico del trabajador autónomo económicamente dependiente (1ª ed.). Editorial Comares, página 79.

En el caso de concurren dos o más supuestos previstos de los establecidos solo se permitirá contratar a un único trabajador por cuenta ajena. Si bien, cuando termine una de esas causas, podrá volver a mantener una relación contractual con otro trabajador por cuenta ajena si concurre otra circunstancia de las previstas, transcurriendo mínimos doce meses entre los contratos; con la excepción de las causas establecidas en los puntos 1 y 2, según estipula el artículo 11.2. a) LETA.

Por último se establece en este apartado que “la contratación por cuenta ajena reglada por el presente apartado será compatible con la bonificación por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la contratación, prevista en el artículo 30 de esta Ley”.

En relación al artículo 11.2 b) LETA, el TRADE tiene que distinguirse del resto de trabajadores por cuenta ajena que realicen una actividad profesional simultánea hacia el cliente principal. A tal efecto, tendrá que efectuar su trabajo de un modo distinto al de los otros trabajadores, contar con unas condiciones distintas para desarrollar la actividad, utilizar medios particulares del TRADE, desarrollar la actividad profesional con criterios organizativos propios, etcétera. Será válido cualquier método necesario para diferenciarse de los trabajadores por cuenta ajena del cliente, esta condición deberá cumplirse durante todo el tiempo que este vigente el contrato con el cliente principal.

El TRADE podrá realizar su actividad económica o profesional con los otros trabajadores por cuenta ajena, no siendo imprescindible que estén separados, incluso puede colaborar con ellos, lo que sí es necesario es que la actividad laboral del TRADE se desarrolle de forma exclusiva e inequívoca por él, no pudiendo prestar sus servicios a otras tareas distintas a las pactadas con el cliente principal. Si bien, el cliente principal podrá contratar varios trabajadores autónomos económicamente dependientes para que realicen la misma actividad profesional o económica, u otra distinta, ya que para el cliente no existe ninguna prohibición.

Esta condición se exige doblemente, ya que el RD 197/2009 en su artículo 5.1.a) establece que “la actividad del trabajador autónomo económicamente dependiente no se ejecutará de manera indiferenciada con los trabajadores que presten servicios bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente”. A tal efecto, podemos suponer que el requisito de distinción con el resto de trabajadores por cuenta ajena solo será aplicable cuando el TRADE preste servicios para el

cliente principal, y no para los servicios que desarrolle para otro cliente, siendo indiferente en este caso si no se diferencia con el resto de trabajadores por cuenta ajena<sup>7</sup>.

En relación con el artículo 11.2. c) LETA, el TRADE tiene que disponer de infraestructura productiva y material propio para desarrollar su actividad profesional cuando sean relevantes económicamente, dependiendo del caso concreto será relevante económicamente si estas condiciones se cumplen o no.

La relevancia económica depende de los costes económicos de la infraestructura productiva y del material propio del que disponga el TRADE, este podrá usar y disponer de los medios que sean propiedad del cliente principal cuando los costes económicos no tengan relevancia alguna. No obstante, será distinto en el caso de que exista gran relevancia económica, debido a que el TRADE tendrá que usar sus propios medios e infraestructura productiva. Se entiende que este requisito está creado para distinguir otra vez más al resto de los trabajadores por cuenta ajena de la figura del TRADE, al exigirle originalidad e independencia en el modo en que desarrolla su actividad profesional.

El límite de dicha relevancia económica se encuentra regulada en el artículo 11.3 LETA que establece que “los titulares de establecimientos o locales comerciales e industriales y de oficinas y despachos abiertos al público y los profesionales que ejerzan su profesión conjuntamente con otros en régimen societario o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en derecho no tendrán en ningún caso la consideración de trabajadores autónomos económicamente dependientes” ya que si tienen tal infraestructura productiva no serían considerados TRADE, sino empresarios.

En relación al artículo o 11.2 d) LETA, el TRADE *tendrá que desarrollar su actividad profesional con criterios organizativos propios*, disponiendo de dependencia en el sentido en que goza de autonomía para desarrollar su actividad profesional o económica, siendo esta una de las grandes diferencias entre el TRADE y el trabajador por cuenta ajena, debido a que el desarrollo de la actividad laboral de este último esta supeditada a la voluntad de su superior, es decir, su jefe.

---

<sup>7</sup>Aguilar Martín, M.(2015).El régimen jurídico del trabajador autónomo económicamente dependiente (1ª ed.). Editorial Comares, página 83.

Si bien aunque exista dependencia del TRADE para desarrollar su actividad profesional, el cliente podrá darle unas indicaciones técnicas para que realice su trabajo. “La jurisprudencia ha entendido que la dependencia es la situación del trabajador sometido a la esfera organicista, rectora y disciplinaria de la empresa. De aquí que lo relevante para observar la existencia de dependencia sea la inclusión del trabajador en el poder de dirección y mando del empresario, siendo irrelevante, a estos efectos, que el vínculo contractual pueda ser variable en cada caso”<sup>8</sup>.

Las indicaciones técnicas dadas por el cliente principal al TRADE no podrán invadir sus criterios organizativos, ni indicar de que forma tiene que desarrollar su actividad laboral, puesto que este decidirá según su propio criterio organizativo y “buen entender”, además asumirá los riesgos derivados de su actividad y aportará sus propios recursos económicos; si bien, si estará subordinado a las órdenes del cliente principal, en el sentido de que pondrá a disposición del cliente su fuerza de trabajo.

La problemática que entraña esta cuestión se encuentra en distinguir entre órdenes por parte del cliente principal o indicaciones que pueda dar el mismo para la realización de la actividad profesional, no obstante quién decidiría en última instancia entre un conflicto por criterios organizativos entre el TRADE y el cliente principal, será la jurisdicción social atendiendo a las características de cada caso concreto. En el caso de qué lo hubiese, sería necesario atender a lo establecido en el correspondiente AIP el cual podría regular esta situación.

El RD 197/2009 especifica este punto al señalar en su artículo 5.1.b) que el TRADE desarrollará su actividad profesional “con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas que pudiera recibir de su cliente para la realización de la actividad”, suponiendo que las indicaciones irán dirigidas al resultado final del trabajo encargado, y no en cómo debe desarrollar su actividad profesional.

---

<sup>8</sup>Aguilar Martín, M. C. (2015). El régimen jurídico del trabajador autónomo económicamente dependiente (1ª ed.). Editorial Comares, cita página 88.

Algunos autores han calificado estas indicaciones técnicas recibidas por el TRADE como supeditación al “poder de coordinación” del cliente principal, siendo distinta la situación a la que están sometidos los trabajadores por cuenta ajena constituyéndose esta como “poder de dirección”<sup>9</sup>

En relación al artículo 11.2. e) que establece que *el TRADE “percibirá una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de acuerdo con lo pactado con el cliente y asumiendo riesgo y ventura de aquélla”*. De este artículo podemos extraer tres ideas distintas.

El TRADE realiza su actividad profesional o económica para recibir una remuneración económica, al ser un trabajo desarrollado a título lucrativo; la cuestión principal se encuentra en que el artículo pone como condición que percibirá su contraprestación económica en función del resultado de la actividad, entendiendo que para que el TRADE reciba los honorarios pactados tendrá que terminar su actividad profesional y que esta sea valorada favorablemente por parte del cliente.

Este requisito también se le aplica al autónomo clásico, ya que éste al igual que el TRADE tendrá que negociar con el cliente la contraprestación económica que va a recibir por la realización de la actividad profesional o económica pactada.

El punto más complejo se encuentra en la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentra el TRADE al asumir el riesgo y ventura de aquélla, ya que dependiendo de si surge algún imprevisto o problema al realizar la actividad pactada podrán disminuir considerablemente los beneficios del TRADE. Así bien, si surgiera alguna contingencia cuando realiza su actividad profesional, esto implicaría un gasto extra que no tendría que afrontar el cliente principal, sino el TRADE que es quién asume el riesgo.

De este requisito obtenemos la nota de ajenidad que caracteriza al trabajador por cuenta propia, al depender del trabajador autónomo el resultado de la actividad profesional o económica realizada para el cliente, pese a que el producto de este trabajo satisfecho pertenece al cliente con el cual ha mantenido una relación contractual.

---

<sup>9</sup>Monereo Pérez, J.L y Fernández Avilés, J.A(Dir. y Coord.) : El estatuto del Trabajador Autónomo, Comentario a la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, página 152.



Todos los requisitos del artículo 11.2 LETA tendrán que producirse de manera simultánea, es decir que sucedan al mismo tiempo, para que así el trabajador pueda ser considerado TRADE, además habría que añadir el requisito de dependencia económica hacia el cliente principal siendo necesario percibir por parte de este el 75% de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales. Si bien, existen algunas excepciones como sería el caso del sector de los agentes de seguros, del sector de los agentes comerciales y del sector del transportes, estos no tienen la obligación de cumplir todos los requisitos establecidos.

Por último, el artículo 11.3 LETA establece que “los titulares de establecimientos o locales comerciales e industriales y de oficinas y despachos abiertos al público y los profesionales que ejerzan su profesión conjuntamente con otros en régimen societario o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en derecho no tendrán en ningún caso la consideración de trabajadores autónomos económicamente dependientes”.

Se configura así una exclusión legal a la figura del TRADE cuando se produjeran las circunstancias establecidas en este artículo, pese a que concurran el resto de requisitos (anteriormente vistos) quedando excluido de la aplicación del régimen jurídico previsto en el capítulo III de la LETA para trabajadores autónomos económicamente dependientes<sup>10</sup>.

Esta prohibición también se encuentra recogida en el artículo 5.2 f) del RD 197/2009 al reiterar que el TRADE deberá incluir una declaración del trabajador autónomo indicando “que no es titular de establecimientos o locales comerciales e industriales y de oficinas y despachos abiertos al público”. Esta exclusión no es operativa cuando el titular del establecimiento lo tuviera arrendado percibiendo únicamente las rentas que este generará, sólo se aplicaría esta exclusión cuando el TRADE hiciera uso y disfrute del local, utilizándolo para desarrollar su actividad profesional.

Por otro lado, el TRADE no puede ser miembro de una sociedad basándose: primero, una sociedad constituye un fondo patrimonial común para colaborar en la explotación de una empresa, por lo tanto no se precisaría claramente la dependencia económica de cada uno de los socios, no dándose así la dependencia económica del 75% que se precisa para ser denominado TRADE;

---

<sup>10</sup>Aguilar Martín, M. C. (2015).El régimen jurídico del trabajador autónomo económicamente dependiente (1ª ed.). Editorial Comares, cita página 103.

segundo, se podría producir una situación de competencia entre el empresario y el trabajador, a nivel práctico, no jurídico<sup>11</sup>.

Esta misma condición se vuelve a reiterar en el artículo 5.2 g) del RD 197/2009 al establecer que el TRADE deberá declarar en el contrato laboral “que no ejerce profesión conjuntamente con otros profesionales en régimen societario o bajo cualquier otra fórmula jurídica admitida en derecho”.

No obstante, existe una excepción a esa exclusión al disponer la disposición adicional octava del RD 197/2009 sobre profesionales en régimen societario que “de conformidad con lo establecido en la exclusión del apartado 3 del artículo 11 del Estatuto del Trabajo Autónomo, las especificaciones del contrato de trabajador autónomo económicamente dependiente contenidas en el capítulo primero de este real decreto no se entenderán aplicables a la relación contractual establecida entre profesionales que ejerzan su profesión conjuntamente con otros en régimen societario o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en derecho. La citada exclusión se entiende sin perjuicio del contrato de trabajador autónomo económicamente dependiente que pueda celebrar el profesional con un cliente distinto de la sociedad o persona jurídica en la que esté inserto. En este supuesto, para el cálculo del porcentaje del 75 por ciento que dispone el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 2 de este real decreto, se incluirán en el cómputo de los ingresos totales, los que el profesional perciba procedentes de la sociedad o persona jurídica de la que forme parte”.

Deduciendo así que el TRADE puede ser miembro de una sociedad, pero cuando preste servicios conjuntamente con otros perderá la consideración de TRADE; ahora bien, cuando el cliente con el cual tenga una relación contractual sea externo a dicha sociedad si se le considera TRADE y le será de aplicación el régimen jurídico para trabajadores autónomos económicamente dependientes<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup>Gala Duran, C: El ámbito subjetivo de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. página 64.

<sup>12</sup>Hernández Martínez, M: “El trabajador autónomo económicamente dependiente”, página 272.

### 1.3. DEPENDENCIA ECONÓMICA

El requisito de dependencia económica del TRADE hacia su cliente principal, en mi opinión es la condición más importante ya que es lo que diferencia a un autónomo clásico de un TRADE, siendo solo una condición indispensable para el segundo, no obstante no es el único requisito que debe cumplir.

La figura del cliente principal se podría considerar tanto una persona física como jurídica, debido a que la LETA no se menciona nada al respecto; si bien, en el RD 197/2009, en su artículo 1.2 define la figura del cliente como aquella “persona física o jurídica para la que se realiza la actividad económica o profesional a que se refieren los apartados anteriores”, por lo tanto, el cliente puede ser tanto una persona física como jurídica<sup>13</sup>.

El artículo 11.1 LETA establece que “los trabajadores autónomos económicamente dependientes son aquéllos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75 por ciento de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales”. Siendo necesario que obtenga el 75% de sus ingresos de un cliente principal, que no quiere decir único, ya que podrá percibir ingresos de otros clientes siempre que no superen el 25% de sus ganancias.

El artículo 2.1 del RD 197/2009 nos aclara lo que se considera ingresos y cómo habrá que calcular el 75% de los ingresos del TRADE al exponer que “se entenderán como ingresos percibidos por el trabajador autónomo del cliente con quién tenga dicha relación, los rendimientos íntegros, de naturaleza dineraria o en especie, que procedan de la actividad económica o profesional realizada por aquél a título lucrativo como trabajador por cuenta propia. Los rendimientos íntegros percibidos en especie se valorarán por su valor normal de mercado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de

---

<sup>13</sup>Aguilar Martín, M. C. (2015).El régimen jurídico del trabajador autónomo económicamente dependiente (1ª ed.). Editorial Comares, página 60.

las Persona Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio”.

Por consiguiente, para calcular los ingresos que puede obtener el TRADE hay que atender a los rendimientos íntegros del trabajo, siendo estos “todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas”, según establece el artículo 17.1 Ley 35/2006; , y a los rendimientos íntegros de actividades económicas, siendo “aquellos que procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios”, según establece el artículo 27.1 Ley 35/2006<sup>14</sup>.

Continúa el artículo 2.1. del RD 19/2007 en su segundo párrafo explicando que “para el cálculo del porcentaje del 75 por ciento, los ingresos mencionados en el párrafo anterior se pondrán en relación exclusivamente con los ingresos totales percibidos por el trabajador autónomo por rendimientos de actividades económicas o profesionales como consecuencia del trabajo por cuenta propia realizado para todos los clientes, incluido el que se toma como referencia para determinar la condición de trabajador autónomo económicamente dependiente, así como los rendimientos que pudiera tener como trabajador por cuenta ajena en virtud de contrato de trabajo, bien sea con otros clientes o empresarios o con el propio cliente. En este cálculo se excluyen los ingresos procedentes de los rendimientos de capital o plusvalías que perciba el trabajador autónomo derivados de la gestión de su propio patrimonio personal, así como los ingresos procedentes de la transmisión de elementos afectos a actividades económicas”.

Por lo tanto, para valorar los ingresos obtenidos por el TRADE tenemos que incluir los ingresos totales derivados de actividades económicas profesionales de todos los clientes, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, para después aplicar el porcentaje del 75%; exceptuando para el

---

<sup>14</sup>Aguilar Martín, M. C. (2015). El régimen jurídico del trabajador autónomo económicamente dependiente (1ª ed.). Editorial Comares, página 64.

correspondiente cálculo, los ingresos procedentes de los rendimientos de capital o plusvalías y los ingresos procedentes de la transmisión de elementos afectos a actividades económicas. Así conoceremos si hay dependencia económica por parte del TRADE hacia un cliente principal.

#### 1.4. LAS EXCEPCIONES CONFIGURACIÓN GENERAL DEL TRADE

La LETA excluye del cumplimiento de algunas condiciones necesarias para ser considerado trabajador autónomo económicamente dependiente, por las características especiales de su labor, al sector de los agentes de seguros, el sector de los agentes comerciales y el sector del transportes, estos no tienen porque cumplir todos los requisitos establecidos.

##### **A) Agentes del sector de seguros**

Los agentes de seguros exclusivos y los agentes de seguros vinculados que se ajusten a las condiciones determinadas en el artículo 11 LETA (con algunas exclusiones), en el artículo 8 y siguientes del RD 197/2009 serán considerados trabajadores autónomos económicamente dependientes y estarán sujetos a su regulación jurídica con algunas particularidades.

La ley vigente en materia de contratación de seguros es el “*Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales*, que entró en vigor el pasado 6 de febrero de 2020. Por lo tanto, la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados, y que se aplicaba al contrato de trabajador autónomo económicamente dependiente en el sector de los agentes de seguros ha sido derogada”<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup>Iberley El valor de la confianza. (2020, 18 septiembre) Los agentes de seguros como modalidad de trabajadores autónomos económicamente dependientes. Iberley, Información legal. <https://www.iberley.es/temas/agentes-seguros-modalidad-trabajadores-autonomos-economicamente-dependientes-251>

El artículo 8 del RD 197/2009 incorpora que “quedarán excluidos de la condición de TRADE los agentes de seguros exclusivos y agentes de seguros vinculados que hayan suscrito un contrato mercantil con auxiliares externos”, de conformidad con el artículo 137 RD-Ley 3/2020, de 4 de febrero (concretamente el artículo 8 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados, esta derogada con efectos de 6 de febrero de 2020.)

En relación, al artículo 11.2 LETA existen diversas prohibiciones (los apartados c) y d) ) que este colectivo no tendrá que cumplir, así establece el artículo 9.2 del RD 197/2009 en lo relativo al artículo 11.2.c) “no se considerará económicamente relevante la documentación, el material, ni el uso de instrumentos o herramientas, incluidas las telemáticas, que la entidad aseguradora proporcione a los agentes de seguros autónomos económicamente dependientes”.

Con respecto al criterio organizativo propio del que dispone el TRADE en el ejercicio de su actividad profesional, el agente de seguros (según establece el artículo 9.1 RD 197/2009) “desarrollara su actividad profesional bajo las indicaciones técnicas que recibirá de su cliente considerándose entre otras, las relacionadas con su actividad económica o profesional, especialmente las que provengan de la normativa interna de suscripción y de cobertura de riesgos de la entidad aseguradora, de blanqueo de capitales u otras disposiciones de obligado cumplimiento, de la normativa de protección de datos de carácter personal, y de la normativa de seguros privados”.

Así pues establece finalmente el artículo 9.3 del RD 197/2009 que “el cumplimiento de las indicaciones técnicas que los agentes de seguros autónomos económicamente dependientes puedan recibir de la entidad aseguradora para la que presten sus servicios, así como el uso de la documentación, material, herramientas e instrumentos proporcionados por la entidad aseguradora a aquéllos no supondrá que tales agentes de seguros ejecuten su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten servicios bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente”.

En relación al contrato de agencia de seguros, establece el artículo 10 del RD 197/2009 que “el contrato que se celebre entre el agente de seguros autónomo económicamente dependiente y la entidad aseguradora dentro del ámbito de aplicación del artículo 8 de este real decreto se registrará” por el artículo 141 del RD-Ley 3/2020, del 4 de febrero (el antiguo artículo 10 de la Ley 26/2006, de 17

de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados ) por lo dispuesto en el capítulo I de este real decreto, sin perjuicio de las especificidades que se recogen en este capítulo<sup>16</sup>.

## **B) Agentes comerciales**

Anteriormente a la LETA, el artículo 1.3.f.) del ET disponía que este colectivo está excluido del ámbito de aplicación de esta ley al disponer que “la actividad de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios, siempre que queden personalmente obligados a responder del buen fin de la operación asumiendo el riesgo y ventura de la misma”. Extrayendo la idea de atender a cada caso concreto, distinguiendo entre que trabajador asume el riesgo de las operaciones y qué trabajador no; constituyéndose como un contrato de comisión mercantil cuando se asume el riesgo de la operación, y cuando ese riesgo no lo asume el representante de comercio ligado a la empresa se constituirá como una relación laboral entre ambos<sup>17</sup>.

Tras la entrada en vigor de la LETA esta figura se incluye en el régimen jurídico aplicable al TRADE. Así pues, la disposición adicional decimonovena de la LETA dispone que “en los supuestos de agentes comerciales que, actuando como intermediarios independientes, se encarguen de manera continuada o estable y a cambio de remuneración, de promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos, a los efectos de ser considerados trabajadores autónomos económicamente dependientes, no les será de aplicación el requisito de asumir el riesgo y ventura de tales operaciones, contemplado en el artículo 11, apartado 2, letra e)”.

Por lo tanto, un agente comercial tendrá que cumplir las condiciones marcadas en el artículo 11 de la LETA, exceptuando el punto 11.2.e) LETA ya que el TRADE no tendrá que asumir el

---

<sup>16</sup>Iberley.El valor de la confianza. (2020, 18 septiembre). Los agentes de seguros como modalidad de trabajadores autónomos económicamente dependientes. Iberley, Información legal. <https://www.iberley.es/temas/agentes-seguros-modalidad-trabajadores-autonomos-economicamente-dependientes-251>.

<sup>17</sup>Valdés Alonso, A. (2009).Vista de La regulación del trabajo autónomo económicamente dependiente en la Ley 20/2007: apuntes para un debate. REVESCO. <https://revistas.ucm.es/index.php/REVE/article/view/REVE0808330133A/18816> página 167.

riesgo y ventura de las operaciones en cuestión para recibir la contraprestación del cliente en función del resultado.

### **C) Los trabajadores autónomos del sector del transporte**

Antes de la entrada en vigor de la LETA, el colectivo del sector del transporte estaba excluido del ámbito del estatuto del trabajador, actualmente están considerados trabajadores autónomos económicamente dependientes con ciertas particularidades y su regulación esta establecida en el capítulo III de la LETA.

La disposición adicional undécima de la LETA , dispone que “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.3 g)<sup>18</sup> del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, se consideran incluidas en el ámbito regulado por la presente Ley las personas prestadoras del servicio del transporte al amparo de autorizaciones administrativas de las que sean titulares, realizada mediante el correspondiente precio con vehículos comerciales de servicio público cuya propiedad o poder directo de disposición ostenten, aun cuando dichos servicios se realicen de forma continuada para un mismo cargador o comercializador. En este caso, serán trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se refiere el artículo 1.2 d) de la presente Ley aquellos que cumplan con lo dispuesto en el artículo 11.1 y 11.2 a) de la misma”.

Existiendo así distintos tipos de transportistas: primero, transportistas vinculados a un empresario a través de una relación laboral; segundo, transportistas que no estarán incluidos en los supuestos contemplado en el artículo 1.3.g) ET, al ser considerados trabajadores autónomos clásicos por no cumplir con todos los requisitos para ser considerados económicamente dependientes;

---

<sup>18</sup>g) “En general, todo trabajo que se efectúe en desarrollo de relación distinta de la que define el apartado 1. A tales efectos se entenderá excluida del ámbito laboral la actividad de las personas prestadoras del servicio de transporte al amparo de autorizaciones administrativas de las que sean titulares, realizada, mediante el correspondiente precio, con vehículos comerciales de servicio público cuya propiedad o poder directo de disposición ostenten, aun cuando dichos servicios se realicen de forma continuada para un mismo cargador o comercializador”.



tercero, los transportistas que cumplan con todos los requisitos del artículo 1.3.g) del ET y 11.1. y 11.2 a) de la LETA que serán considerados TRADE<sup>19</sup>.

El transportista que disponga de un vehículo propio solo tendrá que cumplir con las exigencias del artículo 11.2.a) y c) de la LETA, siendo obvio que si dispone de vehículo propio el aporta los medios e infraestructura imprescindible para el desarrollo correcto de la actividad profesional; eximiéndoles por lo tanto del resto de prohibiciones y condiciones a las que están sometidos el resto de los TRADES.

---

<sup>19</sup>Valdés Alonso, A. (2009). Vista de La regulación del trabajo autónomo económicamente dependiente en la Ley 20/2007: apuntes para un debate. REVESCO. <https://revistas.ucm.es/index.php/REVE/article/view/REVE0808330133A/18816> página 161-162

## **2. REGULACIÓN JURÍDICA**

La regulación jurídica de la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente entraña desde las diversas cuestiones y particularidades del contrato laboral entre el cliente principal y el TRADE, la jornada de trabajo laboral, las causas de justificación para la interrupción de la actividad profesional, las causas de extinción contractual, los procedimientos no jurisdiccionales de solución de conflictos y la competencia jurisdiccional del juzgado correspondiente, hasta los acuerdos de interés profesional, los cuales son de gran importancia para ampliar y regular los derechos del TRADE a nivel colectivo.

### **2.1 EL CONTRATO ENTRE EL CLIENTE PRINCIPAL Y EL TRADE**

Cómo hemos visto con anterioridad, uno de los requisitos imprescindible para ser considerado un trabajador autónomo económicamente dependiente es que el 75% de los ingresos del TRADE tienen que provenir de su cliente principal, además de cumplir las condiciones del artículo 11.2 LETA. El contrato entre ambos será de forma escrita cumpliendo los requisitos del artículo 1261 Cc<sup>20</sup>, el trabajador tendrá que ser considerado TRADE con los requisitos establecidos en el artículo 11 LETA comunicando su condición de dependencia a su empleador.

El contrato constituido entre el TRADE y el cliente principal es único, si bien dependiendo de la naturaleza del objeto del contrato puede estar reglamentado en normas de tipo mercantil, civil, o administrativa; con todo esto, el contrato se regulara por las normas contempladas en el artículo 3 LETA.

El artículo 12.1. LETA establece que el contrato deberá ser formalizado por escrito y posteriormente registrarse en la oficina pública correspondiente<sup>21</sup>. Siendo la regulación establecida

---

<sup>20</sup>”El contrato para la realización de la actividad profesional del trabajador autónomo económicamente dependiente celebrado entre éste y su cliente se formalizará siempre por escrito y deberá ser registrado en la oficina pública correspondiente. Dicho registro no tendrá carácter publico”.

<sup>21</sup>”Artículo 12.1 LETA: El contrato para la realización de la actividad profesional del trabajador autónomo económicamente dependiente celebrado entre éste y su cliente se formalizará siempre por escrito y deberá ser registrado en la oficina pública correspondiente. Dicho registro no tendrá carácter publico”.

en la LETA insuficiente, se creó el “Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos”.

Pese a la obligatoriedad de la norma de formalizar el contrato por escrito, existe la posibilidad de que este no sea de forma escrita, aunque el TRADE tendría igualmente la obligación de cumplir todos los requisitos estipulados para adquirir esa consideración; así se establece en el artículo 12.4 LETA que “cuando el contrato no se formalice por escrito o no se hubiera fijado una duración o un servicio determinado, se presumirá, salvo que exista prueba en contrario, que el contrato ha sido pactado por tiempo indefinido”.

En el momento en el cuál el TRADE comunique fehacientemente a su cliente principal el deseo de formalizar el contrato laboral y transcurra un mes desde el aviso, y el cliente se niegue a realizarlo podrá solicitar el reconocimiento de la condición de TRADE ante los órganos jurisdiccionales del orden social y desde el momento del aviso será considerado como TRADE, si bien esto solo se aplicara a los acuerdos realizados a partir del 11 de diciembre de 2011, ya que con anterior a dicha fecha la Ley 36/2011 no estaba en vigor, y esta modifico la LETA incluyendo entre otras reformas el artículo 11 bis.

El registro del contrato será efectuado en el Servicio Público de Empleo Estatal, el cuál no tendrá carácter publico, por parte del TRADE en el plazo de diez días hábiles después de la firma y deberá comunicar al cliente en el plazo de 5 días desde su registro dicho acto; si pasado el plazo de quince días el trabajador no ha efectuado el registro, el cliente será quién deba registrar el contrato, según establece el artículo 6.1 del RD 197/2009.

El requisito de comunicación al cliente principal de la posición de dependencia que se encuentra el trabajador autónomo es muy importante, ya que el cliente confiaría en que esta celebrando un contrato civil, mercantil o administrativo, sin saber la dependencia que tiene el trabajador hacia él; pudiendo afectar tal circunstancia a la validez del contrato al darse un vicio en el consentimiento.

Tal comunicación debe de realizarse del TRADE al cliente principal antes de firmar el contrato que los vincule, si bien la notificación se puede realizar a voluntad del trabajador, ya que no se establece cómo y en qué momento debe hacerse; si bien, lo recomendable sería que se pusiera de manifiesto en el contrato firmado entre las partes, o que se le comunicara de forma escrita antes de la celebración del contrato para que así el TRADE lo pudiera probar ante el juez si fuese necesario. Si finalmente no se adapta el contrato añadiendo la situación de dependencia del trabajador, independientemente de si hay comunicación o no, no se inaplica el contrato pero sí se producirá un defecto de forma del contrato.

No obstante, puede producirse una situación sobrevenida al trabajador autónomo clásico, el cual mantuviera distintas relaciones contractuales con distintos clientes, y este pasará de trabajador autónomo a TRADE al cumplir los requisitos establecidos en el artículo 11, convirtiéndose uno de estos en su cliente principal; en esta situación “se respetará íntegramente el contrato firmado entre ambas partes hasta la extinción del mismo, salvo que éstas acordasen modificarlo para actualizarlo a las nuevas condiciones que corresponden a un trabajador autónomo económicamente dependiente”, así lo establece el artículo 12.3 LETA.

Para que se dé una relación contractual entre el trabajador autónomo económicamente dependiente y el cliente principal, establece la ley de jurisdicción social y la LETA que: 1. El trabajador tendrá que cumplir los requisitos establecidos en el artículo 11 LETA para considerarse TRADE y notificar tal estado al cliente; 2. solicitar a este la creación de un contrato de TRADE comunicando de manera fehaciente la condición de dependencia hacía él; 3. en los contratos posteriores al 11 de diciembre de 2011, a partir de un mes desde que se procede a comunicar al cliente la voluntad de formalizar el contrato y este no se haya realizado el TRADE podrá solicitar ante los tribunales el reconocimiento del contrato. Recalcando así la necesidad de comunicar fehacientemente la condición de TRADE al cliente principal<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup>Aguilar Martín, M. C. (2015) El régimen jurídico del trabajador autónomo económicamente dependiente (1ª ed.) Editorial Comares, página 113-123

A propósito del requisito de comunicación al cliente principal por parte del correspondiente TRADE de su condición de dependencia, nos encontramos la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2013, la cual considero que si no se cumplía fehacientemente con la obligación de comunicar al TRADE la situación de dependencia económica que se tiene hacia él y no habiéndose probado tal condición, se le aplicaría el régimen jurídico del trabajador autónomo clásico y se le consideraría como tal,; protegiendo así la figura del TRADE, ya si que sino algunos trabajadores podrán evadir la realización de este formalismo y no se podría probar que el cliente principal tenía constancia de la dependencia económica.

La regulación jurídica de la duración del contrato individual entre el TRADE y el cliente principal varía dependiendo de cuándo se firmó el contrato, ya que la Ley de Jurisdicción social modifico a la LETA, por lo cual existirá un régimen jurídico distinto para los contratos firmados antes del 11 de diciembre de 2011, a los que se firmaron a partir del 11 de diciembre de 2011.

De esta manera, establece el artículo 3 del RD 197/2009 que “el contrato tendrá la duración que las partes acuerden, pudiendo fijarse una fecha de término del contrato o remitirse a la finalización del servicio determinado. De no fijarse duración o servicio determinado se presumirá, salvo prueba en contrario, que el contrato surte efectos desde la fecha de su formalización y que se ha pactado por tiempo indefinido”; estando este artículo en concordancia con lo estipulado en el artículo 12.4 LETA.

Como ya hemos comentado anteriormente, el contrato se formalizará por escrito, y fundamentalmente deberá constar la situación de dependencia en la que se encuentra el TRADE frente al cliente principal, aun cuando este no será el único requisito que debe constar en el contrato estableciendo así el artículo 4.2 del RD 197/2009 que deberán incluirse necesariamente.

- a) *“La identificación de la partes que suscriben el contrato, para así poder identificarlas y conocer si tienen capacidad para contratar*
- b) *La precisión de los elementos que configuran la condición de dependiente económico del trabajador autónomo respecto del cliente con el que contrata.*
- c) *La causa y el objeto del contrato, precisando para ello, el contenido de la prestación del TRADE, que asumirá el riesgo y ventura de la actividad y la determinación de la contraprestación económica asumida por el cliente en función del resultado, incluida, en su caso, la periodicidad y el modo de ambas prestaciones.*

- d) *El régimen de la interrupción anual de la actividad, del descanso semanal y de los festivos, así como la máxima duración de la jornada de la actividad laboral, incluyendo su distribución semanal dependiendo de si se computa por mes o por año. Si la trabajadora autónoma económicamente dependiente es víctima de la violencia de género, conforme a lo contemplado en el artículo 14 del Estatuto del Trabajo Autónomo, y en el acuerdo de interés profesional aplicable, deberá contemplarse también la correspondiente distribución semanal y adaptación del horario de la actividad con el objeto de hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.*
- e) *El acuerdo de interés profesional que sea de aplicación, siempre que el TRADE dé su conformidad de forma expresa”.*

No obstante, en el artículo en su apartado 3, concede el derecho a las partes a incluir cualquier otra cláusula que consideren oportuna y conforme a derecho, si bien recomienda concretar en el contrato lo siguiente:

- a) *“La fecha de comienzo y duración de la vigencia del contrato y de las respectivas prestaciones.*
- b) *La duración del preaviso con que el trabajador autónomo económicamente dependiente o el cliente han de comunicar a la otra parte su desistimiento o voluntad de extinguir el contrato respectivamente, en virtud de lo establecido en el artículo 15.1 d) y f) del Estatuto del Trabajo Autónomo, así como, en su caso, otras causas de extinción o interrupción de conformidad con el artículo 15.1 b) y 16.2 del Estatuto del Trabajo Autónomo respectivamente.*
- c) *La cuantía de la indemnización a que, en su caso, tenga derecho el trabajador autónomo económicamente dependiente o el cliente por extinción del contrato, conforme a lo previsto en el artículo 15 del Estatuto del Trabajo Autónomo, salvo que tal cuantía venga determinada en el acuerdo de interés profesional aplicable.*
- d) *La manera en que las partes firmantes del contrato mejorarán la efectividad de la prevención de riesgos laborales, más allá del derecho del TRADE a su integridad física y a la protección adecuada de su seguridad y salud en el trabajo, así como su formación preventiva de conformidad con en el artículo 8 del ET.*
- e) *Las condiciones contractuales aplicables en caso de que el TRADE dejase de cumplir con el requisito de dependencia económica”.*

Por último, en relación a la forma del contrato el artículo 5 del RD 197/2009 concreta unas precisiones específicas que tendrán que verse reflejadas en el contrato. En relación al TRADE, en el contrato tendrá que constar expresamente la situación de dependencia en que se encuentra hacia el cliente principal y confirmarán que se cumplen todos los requisitos del artículo 11.2 de la LETA disponiendo de esta información únicamente el TRADE que tendrá que informar al cliente principal de tal circunstancia.

El cliente tendrá la obligación de informar en un plazo no superior a 10 hábiles desde la contratación del TRADE, en el caso de que los hubiese a los representantes de los trabajadores. En tal notificación deberá “de informar de la identidad del trabajador autónomo, del objeto del contrato, del lugar de ejecución de la actividad profesional, y de la fecha de comienzo y duración del contrato; excluyendo las informaciones que pudiesen afectar a la intimidad personal”<sup>23</sup>.

#### 2.1.1. JORNADA ACTIVIDAD PROFESIONAL

La regulación de la jornada laboral del TRADE respecto de su cliente, esta contemplada en el artículo 14 de la LETA, incluyendo no solo las características de duración de la jornada laboral, sino también el horario, su correspondiente descanso, la conciliación de la vida familiar, etcétera.

El TRADE tendrá derecho a una interrupción de su actividad anual de 18 días hábiles, si bien estos días pueden ser mejorados mediante el contrato, o el correspondiente AIP, así lo establece el artículo 14.1. LETA; este es el caso del acuerdo de interés profesional de Lozano Transporte que mejora de 18 a 24 días la interrupción de la actividad anual<sup>24</sup>, esta interrupción de la jornada se consideraría en los trabajadores por cuenta ajena, el periodo de vacaciones.

El artículo 14.2. LETA indica que “se fijara mediante el contrato individual o el correspondiente AIP, el régimen de descanso semanal, el descanso en los días festivos, la cuantía máxima de la jornada laboral, y la distribución semanal del trabajador en el caso de que se compute

---

<sup>23</sup>Artículo 7 del Real Decreto 197/2009

<sup>24</sup>Artículo 46. Interrupción de la actividad: El transportista tendrá derecho a efectuar una interrupción anual de su actividad profesional de 24 días hábiles al año, debiendo realizarse preferiblemente en los meses de verano o bien, podrán tomarse en uno o dos periodos de un mínimo de 12 días hábiles, preavisando al cargador con una antelación de 15 días naturales a la fecha de su realización.

por mes o año. Siendo obligatoria la regulación ya sea por parte del AIP o del contrato individual, puesto que no es posible la ausencia de regulación legal en materia de descanso semanal y festivos; en el caso de que el trabajador no tuviera suscrito ningún acuerdo de interés profesional el contrato tendría que regular el régimen de descanso semanal y de los días festivos".

La problemática correspondiente a este artículo se encuentra en que regula a nivel colectivo, dando mucho peso a los AIP, dejando a la voluntad de las partes la distribución de la prestación de servicios que puede provocar irregularidades. No obstante, prevalecería el pacto individual entre el cliente y el TRADE a la fuente colectiva que sería el AIP, aun cuando se contradiga con lo establecido en el artículo 3.2. estableciendo que "toda cláusula del contrato individual de un TRADE será nula cuando contravenga lo dispuesto en un AIP que le sea de aplicación a dicho trabajador"<sup>25</sup>.

"La realización de actividad por tiempo superior al pactado contractualmente será voluntaria en todo caso, no pudiendo exceder del incremento máximo establecido mediante acuerdo de interés profesional. En ausencia de acuerdo de interés profesional, el incremento no podrá exceder del 30 por ciento del tiempo ordinario de actividad individualmente acordado", así lo establece el artículo 14. 3 LETA. Manifestando así que el límite de tiempo extraordinario de actividad laboral individual que podrá realizar de manera voluntaria el trabajador será de un 30%; a excepción de los casos anteriores que se podían regular mediante el AIP y el contrato individual, en este caso solo se podrá regular mediante el acuerdo de interés profesional o mediante la LETA, sin existir aquí autonomía de la voluntad de las partes.

La LETA no da apenas posibilidad a la conciliación personal, laboral y profesional, estableciendo únicamente el artículo 14.4 LETA que " el horario de actividad procurará adaptarse a los efectos de poder conciliar la vida personal, familiar y profesional del TRADE". Así pues, solo existe la posibilidad de adaptación cuando no afecte a la organización de su actividad laboral,

---

<sup>25</sup>Eguizabal, R. A., del Rey Guanter, S., & Gala Durán, C. (2007) Comentarios al Estatuto del Trabajo Autónomo (1.a ed.). Lex Nova, página 190.



percibiendo de este apartado que será en supuestos excepcionales cuando se procederá a la conciliación<sup>26</sup>.

Es necesario señalar que el artículo 14.5 LETA hace referencia a “la trabajadora autónoma económicamente dependiente que sea víctima de la violencia de género disponiendo que tendrá derecho la adaptación del horario de actividad con el objeto de hacer efectiva su derecho a la asistencia social integral y su protección”.

### 2.1.2. EXTINCIÓN CONTRACTUAL

La extinción de la relación contractual entre un cliente y el TRADE se regula en el artículo 15 LETA, existiendo una serie de circunstancias tasadas para que se pueda resolver la relación laboral entre ambas, esto es así para que no se rescinda el contrato de manera unilateral por una de las partes.

La LETA dota de plena libertad a las partes para negociar las condiciones del contrato, ajustando este a la voluntad de las partes; así pues la LETA no especifica la existencia de ningún plazo de preaviso para la extinción del contrato, ni los requisitos para la extinción del contrato, ni tampoco los efectos de la extinción, etcétera.

Por lo tanto, al existir tan pocos motivos y dotando de tanta autonomía al cliente, este puede rescindir el contrato en cualquier momento sin apenas consecuencias, y dejando en una situación de vulnerabilidad al TRADE<sup>27</sup>.

Las causas por las que se puede extinguir la relación contractual están formuladas en el artículo 15.1 LETA siendo las siguientes:

---

<sup>26</sup>Eguizabal, R. A., del Rey Guanter, S., & Gala Durán, C. (2007) Comentarios al Estatuto del Trabajo Autonomo (1.a ed.). Lex Nova, página 192

<sup>27</sup>Aguilar Martín, M. (2015) El régimen jurídico del trabajador autónomo económicamente dependiente (1ª ed.). Editorial Comares, página 183

- a) *“El acuerdo mutuo entre las partes*
- b) *Las causas válidamente consignadas en el contrato individual, salvo que las mismas constituyan un abuso de derecho manifiesto.*
- c) *La jubilación, la muerte o la invalidez incompatibles con la actividad profesional, conforme a la correspondiente legislación de la Seguridad Social.*
- d) *El desistimiento del TRADE, debiendo en tal caso mediar el preaviso estipulado o conforme a los usos y costumbres.*
- e) *Voluntad del TRADE, fundada en un incumplimiento contractual grave de la contraparte.*
- f) *Voluntad del cliente por causa justificada, debiendo mediar el preaviso estipulado o conforme a los usos y costumbres.*
- g) *Por decisión de la trabajadora autónoma económicamente dependiente que se vea obligada a extinguir la relación contractual como consecuencia de ser víctima de violencia de género.*
- h) *Cualquier otra causa legalmente establecida”.*

La voluntad de las partes es una de las causas recogidas en la LETA para la extinción del contrato laboral, pudiéndose rescindir el contrato por mutuo acuerdo de las partes fijando así esta posibilidad en el momento que se negocia la contratación, creando una cláusula en el contrato individual, o durante el transcurso de la relación laboral acordándose entre las partes.

Si bien la voluntad de las partes esta sujeta al sistema de fuentes del régimen profesional contemplado en el artículo 3. de la LETA y a los principios generales del derecho como la buena fe (artículo 7.1. CC), la prohibición de abuso de derecho o ejercicio antisocial del mismo (artículo 7.2. CC) y el fraude de ley (artículo 6.4 CC), para así evitar la vulneración de derechos del TRADE, siendo esta la parte débil en la relación contractual<sup>28</sup>.

Los principios generales del derecho anteriormente citados, también son válidos para las causas válidamente consignadas en el contrato para proceder a su extinción; como dice su propio apartado si esta cláusula constituye un abuso de derecho devendría nula, siguiendo el contrato vigente. Cuando finalice la actividad por esta causa, como por ejemplo que la duración del contrato

---

<sup>28</sup>Aguilar Martín, M. C. (2015)El régimen jurídico del trabajador autónomo económicamente dependiente (1ª ed.). Editorial Comares. página 184.

sea de 2 años y ya haya finalizado este periodo, el TRADE tendrá derecho a la prestación cese de actividad.

Cuando el cliente se encuentre en el escenario de muerte, jubilación o invalidez, el TRADE tendrá derecho a la prestación por cese de actividad, sin embargo si es el TRADE quién se encuentra en este escenario tendrá derecho a la pensión de jubilación, de invalidez, si tuviera familiares estos podrían tener derecho, si cumplieren los requisitos a la pensión de orfandad o viudedad. Si la trabajadora autónoma económicamente dependiente fuera víctima de violencia de género, podría solicitar el cese de actividad; esta situación se repetiría si se produjese la interrupción justificada de la actividad profesional.

El TRADE y el cliente pueden de manera unilateral rescindir el contrato sin necesidad de justificar su voluntad: Primero, en el caso de que el TRADE extinga su relación laboral tendrá que precisar al cliente con la antelación prevista en su contrato individual o el fijado en el AIP, si el TRADE no realizará esta cuestión, el cliente tendría derecho a una indemnización por daños y perjuicios; ahora bien si el TRADE avisa con la antelación establecida propiciando así que no se perturbe el normal desarrollo de la actividad, este no tendría que indemnizar al cliente. Sería un caso distinto si el TRADE rescinde el contrato entre ambos por incumplimiento contractual grave del cliente (estos motivos tienen que estar establecidos en el contrato individual o en el AIP correspondiente), pudiendo así el TRADE extinguir el contrato y tener derecho a una indemnización por daños y perjuicios, así lo establece el artículo 15.2 LETA.

Segundo, el cliente también puede rescindir el contrato, una de las causas sería el desistimiento siempre y cuando haya una causa de justificación, si no existiría el TRADE tendría derecho a una indemnización. Además si el TRADE no pudiera desarrollar su actividad laboral constituyendo así un incumplimiento contractual, el cliente podría revocar el contrato sin derecho a indemnización, así lo establece el artículo 15.3. LETA. Igual que el TRADE, el cliente tendrá que notificar tal circunstancia con un preaviso con la antelación estipulada en el AIP correspondiente o en el contrato individual<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup>Aguilar Martín, M. C. (2015). El régimen jurídico del trabajador autónomo económicamente dependiente (1ª ed.). Editorial Comares. página 187.

Respecto a las consecuencias de la extinción del contrato, es de gran interés la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, y más concretamente su artículo 5.3 que regula en que casos los TRADES tienen derecho a prestación de la Seguridad Social en los situaciones de cese de la actividad.<sup>30</sup>

#### 2.1.2.1. Indemnización.

Tanto el TRADE como cliente pueden rescindir el contrato unilateralmente, pero el trabajador se encuentra en una situación de vulnerabilidad y dependencia frente a este, siendo la parte más damnificada si se extinguiera el contrato. El TRADE podrá fijar en su contrato individual o en su AIP la cuantía por la que recibirá la indemnización por perjuicios y daños, siempre y cuando el motivo sea injustificado<sup>31</sup>.

Existe la posibilidad de que el TRADE no haya especificado en su contrato individual, ni en el AIP la cuantía de la indemnización, señalándonos la ley en su artículo 16.4. LETA que “en los casos en que no estén regulados, a los efectos de determinar su cuantía se tomarán en consideración, entre otros factores, el tiempo restante previsto de duración del contrato, la gravedad del incumplimiento del cliente, las inversiones y gastos anticipados por el trabajador autónomo económicamente dependiente vinculados a la ejecución de la actividad profesional contratada y el plazo de preaviso otorgado por el cliente sobre la fecha de extinción del contrato”.

La lista de elementos que sirven para calcular la cuantía de la indemnización no es una lista cerrada, siendo unos parámetros primarios y abiertos a ampliación; por consiguiente, la valoración del órgano jurisdiccional social es decisiva para estimar la cuantía indemnizatoria de cada caso. Si bien, nunca se podrá calcular, ni equiparar la indemnización de un TRADE con la de un trabajador por cuenta ajena.

---

<sup>30</sup>Navarro Nieto, F. Especialidades del régimen profesional del TRADE en jornada, interrupciones y extinción de la relación contractual. Editorial Temas Laborales núm. 114/2012, página 48.

<sup>31</sup>Artículo 15.LETA Extinción contractual 4. “Cuando la parte que tenga derecho a la indemnización sea el trabajador autónomo económicamente dependiente, la cuantía de la indemnización será la fijada en el contrato individual o en el acuerdo de interés profesional que resulte de aplicación”.

### 2.1.3. INTERRUPCIÓN JUSTIFICADA ACTIVIDAD PROFESIONAL

El TRADE puede interrumpir la actividad profesional que realiza por causas justificadas, no dando lugar a la extinción del contrato con el cliente principal por incumplimiento del TRADE; si bien, estas causas solo afectarán al contrato con el cliente principal, si se dieran con otro cliente si se podría extinguir el contrato o podría seguir desarrollando su actividad.

La LETA no establece que se considerara interrupción, ni los plazos de previos o justificación, ni de qué derechos se dispone durante esta interrupción tales como la contraprestación económica, el disfrute de determinados derechos ( ej. dietas, peligrosidad), si existe alguna sanción por parte del cliente principal, etcétera. Por consiguiente, estas cuestiones se tendrán que detallar en el contrato individual, o en los AIP.

Las causas que se consideran debidamente justificadas para la interrupción justificada de la actividad profesional están reguladas en el artículo 16 LETA, concretamente en el 16.1, aunque estas podrán ampliarse mediante contrato o acuerdo de interés profesional (señala el artículo 16.2. LETA), siendo estas:

- a) *“Que las partes acuerden mutuamente las causas de interrupción.*
- b) *La necesidad de atender responsabilidades familiares urgentes, sobrevenidas e imprevisibles.*
- c) *El riesgo grave e inminente para la vida o salud del trabajador autónomo, según lo previsto en el apartado 7 del artículo 8<sup>32</sup> de esta ley.*
- d) *El nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar o la incapacidad temporal*
- e) *El riesgo producido por el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve meses.*
- f) *La situación de violencia de género, para que la trabajadora autónoma económicamente dependiente haga efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.*
- g) *Fuerza mayor”.*

---

<sup>32</sup>”Artículo 8. Prevención de riesgos laborales 7. El trabajador autónomo tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o salud”.

La interrupción de la actividad ocasiona temporalmente la realización de la actividad profesional por parte del TRADE hacia el cliente principal, fundamentados en un primer momento en la voluntad de las partes; continuando la relación laboral entre ambas una vez que se reanude la actividad, sin cesar en ningún momento el contrato pese a la interrupción de las obligaciones profesionales del TRADE; estableciendo así el artículo 16.3 LETA que “las causas de interrupción de la actividad previstas en los apartados anteriores no podrán fundamentar la extinción contractual por voluntad del cliente”.

No obstante, continúa el artículo diciendo “si el cliente diera por extinguido el contrato, tal circunstancia se consideraría como una falta de justificación a los efectos de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior”, es decir el TRADE tendría derecho a recibir una indemnización por daños y perjuicios, bajo las condiciones pactadas en el contrato individual o en su AIP.

Por último, señala que en los supuestos de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar; y fuerza mayor “que ocasionen un perjuicio importante al cliente que paralice o perturbe el normal desarrollo de su actividad, podrá considerarse justificada la extinción del contrato” Al no especificar que se entiende por “perjuicio importante” los tribunales serán los encargados de precisar el significado y las características concretas.

En el caso de que el cliente principal rescindiera la relación contractual sin tener esta una justificación, solo por su voluntad de extinguir el contrato produciría una obligación de indemnización; por lo tanto, si un cliente quisiera finalizar su relación contractual sólo tendría que hacerlo y asumir su responsabilidad indemnizatoria, pero no podrá hacer su voluntad sin asumir el pago de una indemnización. Lo determinante es justificar el retraso en la realización de la actividad profesional, y no en cómo se organiza el TRADE ya que eso entra dentro de su autonomía<sup>33</sup>.

Una de las causas de justificación es el mutuo acuerdo entre las partes, por lo tanto, éstas podrán de manera voluntaria acordar ya sea de manera anterior (en el AIP o en el contrato

---

<sup>33</sup>Aguilar Martín, M.(2015) El régimen jurídico del trabajador autónomo económicamente dependiente (1ª ed.). Editorial Comares, paginas 175-176.

individual) , como posterior (después de ocurrir el hecho causante), otra causa de justificación de la interrupción de la actividad, encontrándose esta disposición dentro de la voluntad de las partes.

A colación de este apartado, el artículo 16.1.a) , es necesario señalar que el artículo 14 otorgaba el derecho al TRADE de disponer de 18 días hábiles (con posibilidad de mejora mediante AIP o en el contrato privado) de interrupción anual justificada de la actividad, considerándose así días de mutuo acuerdo. Igual que en las causas anteriores, no esta establecido por la LETA, ni por otro texto legal aspectos tales como la retribución durante el descanso, el fraccionamiento de este periodo etcétera, dejando de nuevo estas cuestiones a la voluntad de las partes. Si bien, el contrato que mantienen el cliente principal y el TRADE no podrá ser revocado por esta causa.

Las interrupciones justificadas por las situaciones relacionadas con la conciliación de la vida familiar y profesional están recogidas en el artículo 4.3.g) LETA<sup>34</sup> este derecho esta relacionado con el artículo 16.1 d) y h) LETA (la incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familia, y riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de un menor de 9 meses); estas cuestiones se refieren a necesidades de índole familiar en relación con la conciliación del ámbito familiar y laboral.

Cuando concurren las causas expuestas la LETA permite que el TRADE tenga un trabajador a su cargo para poder continuar la actividad laboral, así lo establece el artículo 11.2.a) LETA<sup>35</sup>.

El TRADE puede interrumpir su actividad profesional y abandonar su puesto de trabajo cuando exista un riesgo grave e inminente para su vida o salud, esta suspensión durará mientras

---

<sup>34</sup>Artículo 4. Derechos profesional: 3. En el ejercicio de su actividad profesional, los trabajadores autónomos tienen los siguientes derechos individuales: g) A la conciliación de su actividad profesional con la vida personal y familiar, con el derecho a suspender su actividad en las situaciones de nacimiento, ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, y adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento familiar, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que, en este último caso su duración no sea inferior a un año".

<sup>35</sup>Artículo 11.2.a) "No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o toda la actividad con terceros, tanto respecto de la actividad contratada con el cliente del que depende económicamente como de las actividades que pudiera contratar con otros clientes. Lo dispuesto en el párrafo anterior, respecto de la prohibición de tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena, no será de aplicación en los siguientes supuestos y situaciones, en los que se permitirá la contratación de un único trabajador: 1. Supuestos de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve meses. 2. Periodos de descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento familiar".

duere el riesgo; al contar el trabajador con dependencia para organizar su trabajo, el cliente principal no podrá rescindir el contrato por tal motivo.

En relación al riesgo grave e inminente se encontraría las situaciones de violencia de género (artículo 16.2.f) LETA), al estar protegiéndose de igual manera su vida y salud; la LETA no establece ninguna medida al respecto, por lo que tendremos que remitirnos a las medidas dispuestas por el juez de protección. Si el cliente principal rescindiera la relación contractual se produciría una decisión injustificada, y se podría acceder a la prestación por cese de actividad, independientemente de si interrupción es temporal como si es una extinción definitiva<sup>36</sup>.

Se considera fuerza mayor como un acontecimiento extraordinario que se desata desde el exterior, imprevisible, y que no hubiera sido posible evitar aún aplicando la mayor diligencia, es decir que fuera un evento externo, imprevisto por las partes e irresistible<sup>37</sup>. Si debido a esta fuerza mayor se interrumpa indefinidamente la actividad “ ocasione un perjuicio importante al cliente que paralice o perturbe el normal desarrollo de su actividad, podrá considerarse justificada la extinción del contrato” establece así el artículo 16.3 LETA.

Para certificar que nos encontramos ante una causa que propicie la fuerza mayor, la Ley 32/2010 precisa en su artículo 6.1b) el procedimiento que se ha de seguir para acreditarlo, siendo este: “ mediante declaración expedida por los órganos gestores en los que se ubique territorialmente el negocio o la industria afectados por el acontecimiento causante de fuerza mayor, a la que se acompañará declaración jurada del solicitante del cese temporal o definitivo de la mencionada actividad. En dicha declaración se hará constar la fecha de la producción de la fuerza mayor”.

---

<sup>36</sup>Aguilar Martín, M. C. (2015). El régimen jurídico del trabajador autónomo económicamente dependiente (1ª ed.). Editorial Comares pagina 179-180

<sup>37</sup>Fuerza mayor. (s. f.). Wolters Kluwer. Recuperado 2 de febrero de 2021, de [https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/C o n t e n t / D o c u m e n t o . a s p x ? p a r a m s = H 4 s I A A A A A A E A M t M S b F 1 j T A A A U M j c 3 N D t b L U o u L M \\_ D x b I w M D C w N z A w u Q Q G Z a p U t - c k h l Q a p t W m J O c S o A 4 q 2 L T j U A A A A = W K E .](https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/C o n t e n t / D o c u m e n t o . a s p x ? p a r a m s = H 4 s I A A A A A A E A M t M S b F 1 j T A A A U M j c 3 N D t b L U o u L M _ D x b I w M D C w N z A w u Q Q G Z a p U t - c k h l Q a p t W m J O c S o A 4 q 2 L T j U A A A A = W K E .)



Debido a la pandemia ocasionada por la COVID-19 se interrumpió la realización de muchas actividades profesionales siendo la causa de justificación la fuerza mayor, por esta razón se promulgo el Real Decreto-ley 30/2020, de medidas sociales en defensa del empleo; entre distintas medidas “el RDL prevé la prórroga de las ayudas por cese de actividad hasta el 31 de enero de 2021 y establece nuevas prestaciones económicas de cese de actividad de carácter extraordinario para los trabajadores autónomos que se vean obligados a suspender todas sus actividades como consecuencia de una resolución de contención del COVID-19”<sup>38</sup>.

## **2.2. LOS ACUERDOS DE INTERÉS PROFESIONAL**

Los acuerdos de interés profesional (en adelante, AIP), en esencia, dotan al TRADE de la posibilidad de negociar colectivamente las condiciones de prestación de servicios, reconociendo “la existencia de un acuerdo que trascienda del mero contrato individual para los firmantes del este”, siendo superior este acuerdo a lo dispuesto de manera individual en el contrato por las partes. Estos acuerdos son otra de las figuras innovadoras que incorpora la LETA, reconociendo así “la posibilidad de existencia de un acuerdo que trascienda del mero contrato individual” señala así el preámbulo de la citada ley.

Por lo tanto, este acuerdo abarca las relaciones laborales únicamente de los TRADES con los empresarios, siempre y cuando estén afiliados a un sindicato o asociado a una organización de autónomos<sup>39</sup>; siendo junto al contrato individual fuente reguladora.

Lo más característico de estos acuerdos sería que no tienen eficacia general, como la mayoría de los convenios, sino que tienen eficacia personal, solo afectan a los firmantes del acuerdo; creando obligaciones para ambas partes, y creando un marco legal dónde se negocia las condiciones profesionales.

---

<sup>38</sup>Pérez, A. (2020, 30 septiembre) COVID-19: prórroga de los ERTE por fuerza mayor y de las ayudas a los autónomos hasta el 31 de enero de 2021 y nuevos ERTE por impedimento o limitación de actividad. ICAIB. <https://www.icaib.org/covid-19-prorroga-de-los-erte-por-fuerza-mayor-y-de-las-ayudas-a-los-autonomos-hasta-el-31-de-enero-de-2021-y-nuevos-erte-por-impedimento-o-limitacion-de-actividad/>

<sup>39</sup>3.Fuentes del régimen profesional 3.2. “Los acuerdos de interés profesional serán, asimismo, fuente del régimen profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes. Toda cláusula del contrato individual de un trabajador autónomo económicamente dependiente afiliado a un sindicato o asociado a una organización de autónomos, será nula cuando contravenga lo dispuesto en un acuerdo de interés profesional firmado por dicho sindicato o asociación que le sea de aplicación a dicho trabajador por haber prestado su consentimiento”.

Se regula en el artículo 13 LETA<sup>40</sup>, si bien, en este artículo solo se esgriman sus rasgos más generales, tales como la obligación de concertarse por escrito, ciertas referencias a su posible contenido y quién lo negocie; deduciendo así que el resto del procedimiento, tal como la vigencia, la publicación oficial de los acuerdos, etcétera será establecido por las partes al amparo del Código civil, constituyéndose así como un contrato privado; además es reseñable que siendo derecho laboral no se producirá una aplicación supletoria del Estatuto de los Trabajadores en materia de negociación colectiva<sup>41</sup>.

El artículo 13 LETA será desarrollado por el *“Real Decreto 1613/2010, de 7 de diciembre, por el que se crea y regula el Consejo de la representatividad de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos en el ámbito estatal y se establece la composición y régimen de funcionamiento y organización del Consejo del Trabajo Autónomo”*.

### 2.2.1 SUJETOS

Existen dos grupos de sujetos legitimados para celebrar estos acuerdos: por un lado estarían, los TRADES y las asociaciones de trabajadores autónomos y los sindicatos que los representan; y por otro los empresarios.

Las asociaciones de trabajadores autónomos y los sindicatos que representan a los TRADES podrán negociar los AIP; los trabajadores autónomos clásicos no podrán llevar a cabo acuerdos ni de manera individual, ni colectivamente, al margen de sindicatos o asociaciones como así ampara el

---

<sup>40</sup>Artículo 13. Acuerdos de interés profesional: “1. Los acuerdos de interés profesional previstos en el apartado 2 del artículo 3 de la presente Ley, concertados entre las asociaciones o sindicatos que representen a los trabajadores autónomos económicamente dependientes y las empresas para las que ejecuten su actividad podrán establecer las condiciones de modo, tiempo y lugar de ejecución de dicha actividad, así como otras condiciones generales de contratación. En todo caso, los acuerdos de interés profesional observarán los límites y condiciones establecidos en la legislación de defensa de la competencia. 2. Los acuerdos de interés profesional deberán concertarse por escrito. 3. Se entenderán nulas y sin efectos las cláusulas de los acuerdos de interés profesional contrarias a disposiciones legales de derecho necesario. 4. Los acuerdos de interés profesional se pactarán al amparo de las disposiciones del Código Civil. La eficacia personal de dichos acuerdos se limitará a las partes firmantes y, en su caso, a los afiliados a las asociaciones de autónomos o sindicatos firmantes que hayan prestado expresamente su consentimiento para ello”.

<sup>41</sup>Castro Argüelles, M. A. (2012, 12 diciembre)Vista de Los acuerdos de interés profesional: <https://revistas.um.es/analesderecho/article/view/139371/136761>. <https://revistas.um.es/analesderecho/article/view/139371/136761> pagina 36 y 37.

artículo 19.1 c) LETA<sup>42</sup>. Es objeto de duda, si un sindicato o asociación puede negociar con un empresario dichos acuerdos, cuando no tenga ningún TRADE afiliado trabajando en dicha empresa, en principio el artículo 13.1 LETA no impide esta práctica al legitimarlos para negociar los acuerdos, entendiendo así que sí pueden.

Pese a que los acuerdos estén negociados por asociaciones y sindicatos, el alcance de estos es de “eficacia personal” afectando únicamente al TRADE que dio su consentimiento y lo firmo, siendo necesaria su afección completa a este acuerdo. Así pues se solicitan dos requisitos para poderse aplicar personalmente a cada TRADE:

- Primero, cumplir los requisitos legales para ser considerado TRADE y dar consentimiento expreso
- Segundo: estar afiliado al sindicato o asociación que hubiese celebrado el acuerdo con esa empresa, y aceptar dicho acuerdo; produciéndose así una doble aceptación, en un primer momento cuando el TRADE se afilie a un sindicato o asociación uniendo a los acuerdos que se hayan formalizado; y en segundo momento, reafirmandose en su adhesión al AIP.

Sin perjuicio de los requisitos anteriores, el TRADE no podrá desligarse del AIP acordado sin un motivo legítimo. Ahora bien, si el TRADE deja de pertenecer o cambia de sindicato, por el cual se ha llegado a suscribirse el AIP entre las partes se pueden dar dos situaciones: en algunos casos, podrá invalidarse el acuerdo suscrito entre las partes, como es el caso del AIP de LOZANO TRANSPORTES, por el cual entro en vigor las cláusulas contenidas en su contrato de transporte y no en el correspondiente AIP; en otros casos, el TRADE no se desvincularía del acuerdo por el principio de *pacta sunt servanda*, que formula la obligación de que “la voluntad de las partes permanezca inalterable”<sup>43</sup>, y menos rescindir de manera unilateral el AIP.

---

<sup>42</sup>Artículo 19. Derechos colectivos básicos. 19.1. “Los trabajadores autónomos son titulares de los derechos a: c) Ejercer la actividad colectiva de defensa de sus intereses profesionales”.

<sup>43</sup>Iberley.es. 2021. Principio De Irrevocabilidad Según El Código Civil. <https://www.iberley.es/temas/principio-irrevocabilidad-codigo-civil-59998>.

No obstante, en relación a la representación de los TRADE es muy conveniente abordar la sentencia del Tribunal Supremo del 3 de julio de 2020 (rec. 17/2019) en la que estipula que la representación de los TRADE no se rige por el artículo 67.3 ET<sup>44</sup>; en esencia, el caso estipula que la eficacia personal de los acuerdos se limita a los firmantes que hayan prestado expresamente su consentimiento para ello, entendiendo que, “es claro que a los TRADE no se les aplica el art. 67.3 ET que establece que la duración del mandato de los delegados de personal y miembros del comité de empresa será de cuatro años”.<sup>45</sup>

Por otro lado, se encuentran las empresas o clientes “para las que ejecuten su actividad”, considerando empresa a los empresarios que la dirigen. En este precepto no se hace referencia si se podrían llevar a cabo los acuerdos por organizaciones de empresarios, entendiendo que si se podría dar debido a que en ningún momento se prohíbe dichas asociaciones, además de que se dotaría de mayor capacidad de negociación, no únicamente a nivel de empresa, sino ampliando así el nivel de tramitación de los acuerdos, llegando tanto a nivel provincial como autonómico o nacional; produciéndose así un panorama similar al de la negociación colectiva de los trabajadores por cuenta ajena<sup>46</sup>.

El consentimiento para el empresario individual es distinto, en el momento en que firma el AIP tiene validez y queda vinculado a este, con la excepción de que en el acuerdo se hubiera establecido una fecha para el comienzo de los efectos; no será necesario doble ratificación como sí lo es para el TRADE.

---

<sup>44</sup>Artículo 67. Promoción de elecciones y mandato electoral 3. “La duración del mandato de los delegados de personal y de los miembros del comité de empresa será de cuatro años, entendiéndose que se mantendrán en funciones en el ejercicio de sus competencias y de sus garantías hasta tanto no se hubiesen promovido y celebrado nuevas elecciones. Solamente podrán ser revocados los delegados de personal y miembros del comité durante su mandato, por decisión de los trabajadores que los hayan elegido, mediante asamblea convocada al efecto a instancia de un tercio, como mínimo, de los electores y por mayoría absoluta de estos, mediante sufragio personal, libre, directo y secreto. No obstante, esta revocación no podrá efectuarse durante la tramitación de un convenio colectivo, ni replantearse hasta transcurridos, por lo menos, seis meses”.

<sup>45</sup>Ignasi, B. H. R. (2020, 3 noviembre). *La duración de la condición de representantes sindicales de los TRADE no se rige por el art. 67.3 ET | Una mirada crítica a las relaciones laborales. una mirada crítica a las relaciones laborales* | Por Ignasi Beltran de Heredia Ruiz. Blog de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. <https://ignasibeltran.com/2020/11/03/la-duracion-de-la-condicion-de-representantes-sindicales-de-los-trade-no-se-rige-por-el-art-67-3-et/>

<sup>46</sup>Barrios Baudor, G., & Apilluelo Martín, M. (2007). *Introducción al estatuto del trabajo autónomo* (1.<sup>a</sup> ed., Vol. 1). Thomson aranzadi. páginas 117-118

Si bien, como antes hemos expuesto se pueden dar las asociaciones empresariales que actúen en nombre y representación de los empresarios individuales, adhiriéndose a los acuerdos. En estos casos, se tendría que producir una suscripción previa incondicional por parte del empresario al acuerdo negociado por la asociación, o bien una suscripción posterior al acuerdo; en este caso, los empresarios estarían en consonancia para lo establecido para los TRADE, al ser para ambos de aplicación inmediata exclusiva a los firmantes directos, y no por asociaciones salvo adhesión anterior.

Dado que es posible que una asociación o sindicato celebre AIP tanto en el ámbito de empresa, como provincial y estatal, se producirán diversos acuerdos que afecten a los afiliados y empresarios, precisando en cada uno temas distintos, como sería el salario, cambios del centro de trabajo, etc<sup>47</sup>.

### 2.2.2. FORMA ACUERDOS DE INTERÉS PROFESIONAL

Como hemos indicado anteriormente, el artículo 13 nos proporciona una idea bastante vaga acerca de los AIP, así pues hay que realizar conjeturas para esgrimir la forma, contenido, validez, duración, procedimiento y demás requisitos.

El artículo 13.1. LETA, señala que “Los acuerdos de interés profesional, concertados entre las asociaciones o sindicatos que representen a los trabajadores autónomos económicamente dependientes y las empresas para las que ejecuten su actividad podrán establecer las condiciones de modo, tiempo y lugar de ejecución de dicha actividad, así como otras condiciones generales de contratación. En todo caso, los acuerdos de interés profesional observarán los límites y condiciones establecidos en la legislación de defensa de la competencia”. De este apartado, extraemos como idea fundamental, que la redacción y negociación de los acuerdos dependerá en gran medida de la voluntad de las partes, siempre y cuando se encuentre al amparo de lo establecido en la LETA, y el Código Civil.

---

<sup>47</sup>Eguizabal, R. A. (2007) Comentarios al Estatuto del Trabajo Autónomo (1.a ed., Vol. 1). Lex Nova. (Edición 2007 páginas 103-107).

Pese a esto, el artículo nos deriva a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia, esta remisión se realiza para que se respeten ciertos elementos clave de la competencia entre las empresas, como serían por ejemplo los honorarios, comisiones o precio de los servicios que perciba el autónomo<sup>48</sup>. La LETA no hace referencia directamente en ningún momento a las condiciones de carácter económico, pero sí lo hace indirectamente al aludir a la ley de la defensa de la competencia. Entendiendo así que los AIP están obligados a respetar la libre competencia, sin poder fijar precios mínimos de prestación de servicios.

Si bien, esta remisión es de extrañar por la clara naturaleza civil de la regulación del contrato, y debido a que la jurisdicción del orden social es él competente para conocer de los problemas suscitados de la aplicación e interpretación de los AIP.

En primer lugar, no existe duda de si los AIP pueden ser de forma escrita o verbal, al señalar el artículo 13.2 LETA que “los acuerdos de interés profesional deberán concertarse por escrito”, siendo este uno de los pocos requisitos que establece, para en líneas generales dotar de seguridad jurídica a las partes.

Al acordarse la celebración y negociación de forma escrita conlleva una serie ventajas: se dota a los acuerdos de eficacia contractual privada, es decir, únicamente es aplicable a las partes contratantes y no puede referir a terceros<sup>49</sup>; además, los acuerdos se deberán realizar como hemos mencionado anteriormente, de forma expresa, teniendo que reiterar la aceptación del acuerdo por las partes para que este sea válido.

Respecto al ámbito temporal, no existe ninguna pauta para conocer en qué momento se realizará las negociaciones, rigiendo durante este proceso las normas establecidas en el Código civil, por lo cual será necesario que antes de iniciarse las negociaciones se constate que las partes tienen capacidad y legitimación negocial.

---

<sup>48</sup>Barrios Baudor, G. L., & Apilluelo Martin, M. (2007). *Introducción al Estatuto del Trabajo Autónomo* (Primera ed., Vol. 1). Thomson Aranzadi. página120

<sup>49</sup>La eficacia del contrato - Derecho UNED. (s/f). Recuperado el 26 de enero de 2021, de Isipedia.com website: <http://derecho.isipedia.com/segundo/derecho-civil-ii/derecho-de-contratos/07-la-eficacia-del-contrato>

Además existen dudas si se podrán negociar los AIP en el ámbito empresarial concomitantemente con la de un convenio colectivo, u otro AIP en un ámbito inferior; diversos autores entienden que sí, al servir ésta simultaneidad para mejorar las condiciones generales al tener ambos acuerdos o convenios un objetivo común.

La vigencia de los acuerdos queda a las disposiciones que establezcan los componentes del acuerdo, como por ejemplo: la duración, la prorrogación del acuerdo, la modificación de determinadas condiciones, o la concurrencia con otros acuerdos.

La duración del AIP dependerá nuevamente por lo estipulado por las partes, precisando así en algunas sentencias que las partes, “fijaran la fecha de entrada en vigor y la finalización de su vigencia. La entrada en vigor está condicionada al consentimiento, excluyéndose, en algunos casos de forma expresa, su aplicación retroactiva”. Si bien, durante el periodo de vigencia de los acuerdos se realizaban modificaciones periódicas acerca de determinados temas, cómo serían el cambio en las condiciones de realización de los servicios, o las condiciones económicas<sup>50</sup>.

Los acuerdos se prorrogarán en las fechas que se establezcan por las partes en el acuerdo, en términos generales será anualmente, cuando nadie se oponga. Asimismo, se establecerán disposiciones para asegurar la aplicación temporal de los acuerdos cuando el período de vigencia de estos haya finalizado, para que así no dejen de aplicarse inminentemente, y puedan volver a prorrogarse por los periodos establecidos; ahora bien, esto sucedería a condición de que ninguna de las partes solicite su rescisión sesenta días<sup>51</sup> antes del termino de finalización del AIP.

Siguiendo esta trayectoria, el artículo 13 en su apartado 4 señala únicamente que “los acuerdos de interés profesional se pactarán al amparo de las disposiciones del Código Civil”, por lo tanto, nos tendremos que remitir al artículo 1254 y siguientes del Cc, en materia de obligaciones

---

<sup>50</sup>Castro Argüelles, M. A. (2011). Vista de Los acuerdos de interés profesional: un balance de la negociación llevada a cabo al amparo del Estatuto del trabajo autónomo. <https://revistas.um.es/analesderecho/article/view/139371/136761> pp. 53.

<sup>51</sup>Iberley.es. 2021. Convenio Colectivo De Empresa De DSV ROAD SPAIN, S.A.U.. [online] Available at: <<https://www.iberley.es/convenios/empresa/convenio-colectivo-empresa-dsv-road-spain-1900216>> [Accessed 26 January 2021]. Según los AIP consultados: “Artículo 5: A fin de evitar el vacío normativo a la terminación de la vigencia inicial de este Acuerdo o la de cualquiera de sus prórrogas, el mismo continuará rigiendo en su totalidad hasta que sea sustituido por otro. La denuncia del presente Acuerdo habrá de formalizarse por escrito y notificarse de forma fehaciente con una antelación de sesenta días a la fecha de su expiración a todas las partes que lo han suscrito”.

contractuales, para redactar estos acuerdos sobretodo en relación a su eficacia, dejando claro el apartado al no mencionar el ET que no será comparable la normativa de los convenios colectivos con los AIP. No obstante, pese a la remisión al código civil los acuerdos se negociarán sin salirnos ni contravenir las especificaciones que marca la LETA.

La eficacia de los acuerdos es limitada al incluir solo a las partes firmantes, al expresar así que “la eficacia personal de dichos acuerdos se limitará a las partes firmantes y, en su caso, a los afiliados a las asociaciones de autónomos o sindicatos firmantes que hayan prestado expresamente su consentimiento para ello”. Esta idea confronta con la establecida para los convenios colectivos estatutarios, los cuales tienen eficacia general<sup>52</sup>, es decir, causa efectos sobre la totalidad de los empresarios y trabajadores incluidos en su ámbito territorial y funcional de aplicación, independientemente de la relación que los una (afiliación) con las partes firmantes.

Mientras que los AIP únicamente cuentan con eficacia personal, o sea, para quienes los firman (el empresario y el TRADE). No obstante, en tanto que el empresario queda obligado al acuerdo desde el mismo momento de la adhesión a este, el TRADE tendrá que validar su consentimiento doblemente; como hemos señalado anteriormente, tiene que existir doble aceptación, no sería suficiente con que el sindicato o asociación al cual estuviera afiliado hubiese ratificado el acuerdo, sino que el TRADE tendría que aceptar el AIP que se le aplique.

En cuanto a la jerarquía de la eficacia, los AIP imperan frente al contrato individual realizado entre el TRADE y el empresario, esta idea se desprende del artículo 3.2. LETA cuando señala que “toda cláusula del contrato individual de un trabajador autónomo económicamente dependiente afiliado a un sindicato o asociado a una organización de autónomos, será nula cuando contravenga lo dispuesto en un acuerdo de interés profesional firmado por dicho sindicato o asociación que le sea de aplicación a dicho trabajador por haber prestado su consentimiento”; en conjunto con el artículo 13.3 que señala que “se entenderán nulas y sin efectos las cláusulas de los acuerdos de interés profesional contrarias a disposiciones legales de derecho necesario”.

---

<sup>52</sup> Artículo 82.3 ET Causa efectos sobre la totalidad de los trabajadores y empresarios incluidos en su ámbito funcional y territorial de aplicación, independientemente de la relación que los una (afiliación) con las partes firmantes”.



Por lo tanto, cualquier cláusula estipulada en el contrato individual, o cualquier otro pacto realizado, que sea contrario a lo referido en el AIP suscrito será nula, incluyendo los acuerdos privados realizados antes de la entrada en vigor de la LETA y de la aceptación de los acuerdos, siendo estos revocados de manera inmediata; también serán nulos los contratos privados suscritos realizados posteriormente a la aceptación del AIP que sean contrarios a estos. Con este apartado, la LETA quiere puntualizar la posición jerárquica superior del AIP.

Si concurriesen distintos AIP no existiría problemática para el TRADE, dado que estos acuerdos tienen eficacia personal ( solo afectan a quien los firmaran); la problemática se daría si aceptase dos o más acuerdos a la vez que fueran coincidentes en la materia y nivel jerárquico, aunque este supuesto no esta previsto en la LETA se sobreentiende que no se podría dar debido a que podrían existir contradicciones entre ambos que hicieran imposible la aplicación sobre el TRADE.

Pese a esto, si se podrían suscribir dos AIP cuando se negocien distintas materias, y se encuentren en niveles diferentes, es decir, en el ámbito profesional y en el ámbito empresarial; estos acuerdos estarían coordinados entre sí, sin dar lugar a contradicciones entre ellos. Entendiendo así, que el TRADE podrá suscribir distintos acuerdos que se *complementen* siempre que traten cuestiones distintas y estén en diferentes niveles.

El contenido material de los acuerdos depende en una parte del sector profesional y de la voluntad de las partes, diferenciando por un lado el empresario, y por otro el TRADE o asociación y sindicatos; así pues están podrán decidir facultativamente las condiciones de modo, lugar y tiempo, rigiéndose por el mínimo legal que establecen otras legislaciones determinadas como seria la civil y la la LETA en su propio articulado, algunos ejemplos serían:

- Respecto a la jornada de trabajo laboral:

- El TRADE tendrá derecho a una interrupción de su actividad profesional anual de 18 días hábiles, teniendo lugar una mejora de estas condiciones mediante los AIP ( artículo 14.1. LETA)

- Determinar el descanso semanal y festivo, la cuantía máxima de la jornada de actividad y en el caso de que esta se compute por mes o año, su distribución semana, todo esto se fijara mediante los AIP (artículo 14.2. LETA)
- La realización de actividad del TRADE por tiempo superior al pactado, es decir, las horas extras; estas se realizaran de manera voluntaria, no pudiendo superar del incremento máximo establecido en el AIP (artículo 14.3 LETA)
- Extinción contractual:
  - En el caso en que se diera la extinción contractual, y la parte que tuviera derecho a indemnización fuera un TRADE, la cuantía de la indemnización sería la fijada por el AIP (artículo 15.4 LETA)
- Las interrupciones legítimas de la actividad profesional:
  - El AIP podrá fijar otras causas de interrupción justificada de la actividad profesional distintas a las causas legalmente previstas en el apartado anterior por parte del TRADE (artículo 16.2. LETA), también podrá fijar las consecuencias que la interrupción de la actividad profesional pudiera causar a las partes (artículo 16.3 LETA)
- Procedimientos no jurisdiccionales de solución de conflictos
  - Las discrepancias se podrán someter al proceso de arbitraje voluntario para la resolución extrajudicial de los conflictos, sometiéndose a las reglas pactadas en los AIP por las partes (artículo 18.4 LETA)
  - En los AIP se podrán instituir órganos extrajudiciales específicos de solución de conflictos (artículo 18.1 LETA); estos órganos podrán albergar en su sede los procesos de conciliación

y mediación que se tienen que hacer con anterioridad al proceso judicial (Disposición adicional primera LETA, punto cinco<sup>53</sup>), así también lo ratifica el artículo 19.2 d) LETA<sup>54</sup>.

Prácticamente la totalidad de las cuestiones son de carácter dispositivo, es decir, depende de la autonomía de la voluntad de las partes legitimadas para negociar dichos acuerdos, no obstante con unos mínimos que se deben cumplir establecidos por la LETA como sería el descanso mínimo de 18 días hábiles. Y como hemos analizado anteriormente, se consideraran nulas las cláusulas estipuladas en un contrato que sean distintas a lo pactado en el AIP adscrito.

En definitiva, los AIP son acuerdos colectivos, por lo tanto no se adecuan a las singularidades que tiene cada TRADE, dándose cierta autonomía a cada trabajador para mejorar o ampliar alguna de las cláusulas estipuladas en los acuerdos de interés profesional.

### 2.2.3. LOS PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS COLECTIVOS

El artículo 17.2 LETA establece que “los órganos jurisdiccionales del orden social, serán los competentes para conocer las cuestiones derivadas de la aplicación e interpretación de los acuerdos de interés profesional, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de defensa de la competencia”.

Es necesario mencionar, que la jurisdicción social no es exclusiva para conocer de los procedimientos que afectan al TRADE , ya que si la materia en cuestión es sobre defensa de la competencia, los órganos encargados eran los juzgados de lo mercantil (disposición adicional primera Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia<sup>55</sup>).

---

<sup>53</sup> Cinco: Se da nueva redacción al artículo 63 que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 63: Será requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma estas funciones que podrá constituirse mediante los acuerdos interprofesionales o los convenios colectivos a los que se refiere el artículo 83 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como los acuerdos de interés profesional a los que se refiere el artículo 13 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo”.

<sup>54</sup>19. Derechos colectivos básicos 2. Las asociaciones de trabajadores autónomos son titulares de los derechos de carácter colectivo a: d) Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de las controversias colectivas de los trabajadores autónomos cuando esté previsto en los acuerdos de interés profesional”

<sup>55</sup>Avilés, A. O., Hernández, J. G., & De Val Tena, A. L. (2014) El derecho a la negociación colectiva: Vol Los acuerdos de Interés profesional de los Trade. Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. pp 125

Si bien, los AIP siguen siendo unos contratos privados que vinculan a las partes, sin constituirse como fuentes de derecho, siendo necesario que sean interpretados y aplicados por los jueces de lo jurisdicción social; al ser acuerdos privados no están publicitados en ningún boletín oficial por lo tanto se deberán proporcionar al órgano encargado del proceso en caso de realizar alguna acción judicial.

Los AIP establecen también procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos, tales como el arbitraje voluntario; no obstante, estos procedimientos no pueden reemplazar la voluntad de los jueces, con la excepción de que las partes se sometan a una sumisión expresa al arbitraje pudiendo así ser despojadas de acudir a los órganos jurisdiccionales para solucionar ese conflicto. En este sentido los sindicatos y asociaciones de trabajadores autónomos estarán legitimados para participar en los procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos siempre que estuviera regulado en el correspondiente AIP (artículo 19.2d) y 19.4 LETA<sup>56</sup>.

#### **2.2.4 PANRICO**

El 14 de abril de 2009 PANRICO S.L.U negocio con la representación de los Transportistas autónomos de Panrico (Federaciones Agroalimentarias de UGT, CCOO y FS TRADE-CCOO y ASRA) el primer Acuerdo de Interés Profesional ratificado en España tras la aprobación de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

El AIP será de aplicación para el colectivo de transportistas autónomos que presten servicios para PANRICO, con la peculiaridad de que la empresa no reconoce a los trabajadores la condición de TRADE. Su ámbito de aplicación estatal, pudiendo suscribirse acuerdos complementarios que regulen las características propias de cada zona. La vigencia del acuerdo tendrá una duración de 4 años , prorrogándose el acuerdo anualmente.

---

<sup>56</sup>Artículo 19 Derechos colectivos básicos “2 Las asociaciones de trabajadores autónomos son titulares de los derechos de carácter colectivo a: d) Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de las controversias colectivas de los trabajadores autónomos cuando esté previsto en los acuerdos de interés profesional. 4. Sin perjuicio de las facultades que corresponden a los sindicatos en el ejercicio del derecho a la libertad sindical, éstos gozarán, además, de todos los derechos del apartado 2 de este artículo respecto de sus trabajadores autónomos afiliados”.

El AIP se divide en 6 capítulos: 1.Ambito de aplicación; 2.Organización de prestación de servicios; 3.Retribución; 4.Extinción del contrato; 5.Prevencción riesgos laborales;6.Comisión mixta.

Las puntos más reseñables del acuerdo serían<sup>57</sup> :

- Los transportistas autónomos tendrán derecho a 30 días naturales de descanso anual, los cuales podrán distribuir en 2 periodos iguales de quince días, disfrutando un periodo en invierno y otro periodo en verano.
- Se establece el derecho a una prima fija mensual de 700,84 euros, y dos adicionales fijándose en los meses de junio y diciembre por la cantidad de 850,53 euros para cada una; fijándose una actualización anual conforme al IPC (Indice de precios al consumidor), artículo 10 AIP
- Se crean unas ayudas referidas a combustible, anticipo mensual, préstamos y ayudas a discapacitados; si bien, para percibirlos es necesario que se encuentren debidamente regularizados en las siguientes obligaciones (disponer de una tarjeta de transporte o autorización administrativa y tener un vehículo de transporte con el cual se puedan desarrollar las prestación del servicio), según lo establece el artículo 14 AIP PANRICO
- Se crea un anexo regulador de los procedimientos para la resolución extrajudicial de conflictos surgidos entre la empresa y el colectivo de transportistas autónomos, llevándose acabo por mediación (la mediación de un tercero imparcial), resultando obligatoria antes de realizar cualquier acción ante un órgano jurisdiccional.
- Estipulan las causas de extinción del contrato remitiéndose a lo previsto en el artículo 15. f) LETA , para poder rescindir un contrato, si bien adecuándose al ámbito profesional. Además fijan una indemnización de cuarenta y cinco días por año natural trabajado en caso de ausencia justificada para proceder a la extinción de contrato o si éste se debe a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción;

---

<sup>57</sup>UGT firma con Panrico el primer Acuerdo de Interés Profesional para los autónomos dependientes. (2009, 23 abril). *La Cerca - Off Line*. <https://www.lacerca.com/noticias/espana/ugt-panrico-acuerdo-autonomos-37467-1.html>

Siendo este último punto el que más nos interesa, la extinción del contrato, que se regula en su capítulo cuarto, del artículo 17 al 19 ambos inclusive, y es la causa de objeto del siguiente auto 4629/2017 (recurso 3568/2016) dictado por el Tribunal Supremo.

El demandante es transportista autónomo, disponiendo de la titularidad de una tarjeta de transporte y propietario del vehículo con el cual realizaba su actividad profesional. Desde el año 2002 el demandante mantenía una relación laboral con PANRICO como autónomo, pero el 29 de marzo de 2012 las partes suscribieron un contrato por el cual el transportista pasa a tener la condición de trabajador autónomo económicamente dependiente respecto a Panrico.

En fecha 14 de abril de 2009 la empresa Panrico y la representación de los Transportistas suscribieron un Acuerdo de Interés Profesional de aplicación a los transportistas. En el AIP entre otras cuestiones se acuerda como causa de extinción del contrato de TRADE la transgresión de la buena fe y abuso de confianza; regulándose el importe de la indemnización que tiene derecho a percibir el transportista en caso de que se declare la ausencia de causa justificada para la extinción del contrato.

La sala entiende que la relación contractual entre ambos comienza en el 2002, no en la fecha de firma del contrato como TRADE (en el 2012), suponiendo el reconocimiento de la antigüedad como TRADE pese a que el contrato no se realizó diez años después.

### 2.3. COMPETENCIA JURISDICCIONAL

Existen distintos medios para la solución de conflictos, por un lado nos encontramos los órganos judiciales, concretamente los tribunales de la jurisdicción social, y por otro lado, los procedimientos no jurisdiccionales; ambas formas están reguladas en la LETA, en el artículo 17 la competencia jurisdiccional y en el artículo 18, los procedimientos no jurisdiccionales de solución de conflictos.

No obstante, antes de acudir a los tribunales de la jurisdicción social, el artículo 18 LETA establece un procedimiento no jurisdiccional de solución de conflictos , siendo un requisito indispensable el intento de conciliación o mediación para poder acceder a la tramitación de acciones judiciales; además los AIP podrán instituir órganos específicos de solución de conflictos.

Siendo este último punto de gran importancia, al posibilitar la creación de que los AIP puedan constituir órganos específicos de solución de conflictos; no siendo ya, los trabajadores por cuenta propia los únicos en tener la oportunidad de acudir a un procedimiento no jurisdiccional<sup>58</sup>.

“Los procedimientos no jurisdiccionales de solución de conflictos estarán basados en los principios de gratuidad, celeridad, agilidad y efectividad”, señala así el artículo 18.2 LETA. Dichos principios están recogidos en la constitución , y más concretamente en su artículo 24.2. CE “todos tienen derecho a un proceso publico sin dilaciones indebidas”, por otro lado los principios de agilidad y efectividad vienen recogidas en distintos resoluciones del Tribunal Constitucional, entendiendo estos principios como una extensión del principio de celeridad.

Así establece el artículo 18.3 LETA que “lo acordado en avenencia tendrá fuerza ejecutiva entre las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación ante el órgano judicial, pudiendo llevarse a efecto por el trámite de ejecución de sentencias” ; por lo tanto, cuando las partes estén conforme con la solución acordada, esta puede producir efectos.

Por último, el artículo 18.4 LETA establece que “las partes podrán igualmente someter sus discrepancias a arbitraje voluntario. Se entenderán equiparados a las sentencias firmes los laudos arbitrales igualmente firmes dictados al efecto. El procedimiento arbitral se someterá a lo pactado entre las partes o al régimen que en su caso se pueda establecer mediante acuerdo de interés profesional, entendiéndose aplicable, en su defecto, la regulación contenida en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de Transportes Terrestres o en cualquier otra normativa específica o sectorial ”.

---

<sup>58</sup>Consejo General del Poder judicial. (2008). *Trabajadores autónomos* (146.<sup>a</sup> ed.). Centro de documentación general. página 270

Por consiguiente para poder tramitar acciones judiciales, es necesario que las partes acudan con anterioridad a la conciliación administrativa ante el órgano que asuma dichas funciones, pudiendo instituirse este órgano mediante los acuerdos de interés profesional; al margen de este proceso se podrá acudir al arbitraje voluntario, regulado en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje<sup>59</sup>.

Luego de haber acudido a los procedimientos no jurisdiccionales de solución de conflictos, y no haber llegado a un acuerdo, nos tenemos que remitir al artículo 17 LETA el cual establece que “1. Los órganos jurisdiccionales del orden social serán los competentes para conocer las pretensiones derivadas del contrato celebrado entre un trabajador autónomo económicamente dependiente y su cliente, así como para las solicitudes de reconocimiento de la condición de trabajador autónomo económicamente dependiente. 2. Los órganos jurisdiccionales del orden social serán también los competentes para conocer de todas las cuestiones derivadas de la aplicación e interpretación de los acuerdos de interés profesional, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de defensa de la competencia”.

Por ende nos tendremos que remitir a la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, que según precisa en su exposición de motivos regula ciertas cuestiones específicas acerca de las reclamaciones del TRADE para así “mejorar la tutela jurisdiccional ante la decisión del empresario-cliente que está en una posición de preponderancia económica frente a ellos”.

La Ley 36/2011 modifico, entre otras cuestiones, el artículo 17 LETA, y se dotó al orden jurisdiccional social con la facultad para conocer de las acciones judiciales establecidas en la LETA realizadas por los TRADE.

Así bien, en el preámbulo de la LETA, en su punto III, enuncia que “El recurso a la Jurisdicción Social previsto en el artículo 17 se justifica porque la configuración jurídica del trabajador autónomo económicamente dependiente se ha diseñado teniendo en cuenta los criterios que de forma reiterada ha venido estableciendo la Jurisprudencia de dicha Jurisdicción.

---

<sup>59</sup>Aguilar Martín, C. (2015). El régimen jurídico del trabajador autónomo económicamente dependiente (1ª ed.). Editorial Comares. Páginas 224



La Jurisprudencia ha definido una serie de criterios para distinguir entre el trabajo por cuenta propia y el trabajo por cuenta ajena. La dependencia económica que la Ley reconoce al trabajador autónomo económicamente dependiente no debe llevar a equívoco: se trata de un trabajador autónomo y esa dependencia económica en ningún caso debe implicar dependencia organizativa ni ajenidad. Las cuestiones litigiosas propias del contrato civil o mercantil celebrado entre el autónomo económicamente dependiente y su cliente van a estar estrechamente ligadas a la propia naturaleza de la figura de aquél, de tal forma que las pretensiones ligadas al contrato siempre van a juzgarse en conexión con el hecho de si el trabajador autónomo es realmente económicamente dependiente o no, según cumpla o no con los requisitos establecidos en la Ley. Y esta circunstancia, nuclear en todo litigio, ha de ser conocida por la Jurisdicción Social. ”

Por lo tanto, la jurisdicción social será la encargada de aplicar e interpretar las cuestiones relativas al régimen profesional de los TRADE, pese a que el artículo 3.1 LETA nos sigue remitiendo a las normas de derecho civil, mercantil o administrativo, cuando la cuestión a resolver no este concretada en la LETA, y no a la legislación laboral. Siendo así, la jurisdicción social la encargada de conocer, aplicar e interpretar las materias propias de otras jurisdicciones, exceptuando la penal, en los asuntos relativos a los TRADES, como ocurre cuando es un trabajador por cuenta ajena<sup>60</sup>.

Se establece así en la Ley 36/2011 en su artículo 2 que “los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en el artículo anterior, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan: d) En relación con el régimen profesional, tanto en su vertiente individual como colectiva, de los trabajadores autónomos económicamente dependientes a que se refiere la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, incluidos los litigios que deriven del ejercicio por ellos de las reclamaciones de responsabilidad contempladas en el apartado b)<sup>61</sup> de este artículo”.

---

<sup>60</sup>Aguilar Martín, M. C. (2015). El régimen jurídico del trabajador autónomo económicamente dependiente (1ª ed.). Editorial Comares. Páginas 223

<sup>61</sup>Artículo 2:b) “En relación con las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario o contra aquéllos a quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad, por los daños originados en el ámbito de la prestación de servicios o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, incluida la acción directa contra la aseguradora y sin perjuicio de la acción de repetición que pudiera corresponder ante el orden competente”.

Para determinar si el tribunal competente es del orden civil o social, tenemos que atender a si la relación laboral entre el cliente y el TRADE es anterior o posterior a la LETA: si la relación fuese posterior a la LETA el encargado de aplicar e interpretar las cuestiones relativas a los TRADE seria la jurisdicción social. Si por el contrario, el contrato es anterior al 11 de diciembre de 2011, fecha en la cual entro en vigor la Ley 36/2011 que modifico la LETA, dependerá de sí el TRADE comunico a su cliente principal la relación de dependencia o si no lo hizo; si comunico tal condición de dependencia el orden competente para conocer del asunto será la jurisdicción social, si en cambio no se ha avisado al cliente de tal situación, los juzgados competentes no serán del orden social<sup>62</sup>.

A colación de la competencia de la jurisdicción social para abordar las controversias suscitadas con los TRADES, podemos remitirnos a la sentencia del Tribunal Supremo del 12 de junio de 2012 (recurso 2060/2011), la cuál trata la cuestión relativa a la competencia jurisdiccional de los tribunales de lo social.

El asunto principal versa sobre el despido de un trabajador que ejercía como transportista con vehículo propio para la empresa NORBERT DENTRESSSANGLE GERPOSA S.A (en adelante, la empresa) dedicándose en exclusiva en su actividad profesional para la empresa como TRADE, como comunico a la empresa mediante un escrito en el año 2008.

En el año 2010 la empresa lo acuso de manipular un tacógrafo, procediendo así a efectuar su despido; se celebro acto de conciliación en el cual no hubo acuerdo entre las partes, acudiendo las partes a los tribunales, el problema ocurre cuando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declara la incompetencia de la jurisdicción social para abordar dicha cuestión, remitiendo a las partes a la jurisdicción civil. Así pues, la parte demandante (el trabajador) formaliza un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para la unificación de doctrina sobre competencia.

---

<sup>62</sup> Aguilar Martín, M. C. (2015). El régimen jurídico del trabajador autónomo económicamente dependiente (1ª ed.). Editorial Comares. Páginas 225-226

El dilema se genera al existir dos pronunciamientos procesales contrarios entre si, estimando la existencia de relación jurídica, dependiendo de si el TRADE formaliza su contrato o no, conllevando la incompetencia o la competencia del orden jurisdiccional social dependiendo del caso.

Estableciendo finalmente el Tribunal, que uno de los objetivos principales del preámbulo de la LETA es dar una “protección mínima de los derechos sociales al TRADE”, por lo que la falta de firma en un contrato escrito sería una simple carencia que no podría obstaculizar las garantías que la ley ofrece al TRADE. Estimando que si se determina que concurren las condiciones que debe cumplir el trabajador autónomo económicamente dependiente, la jurisdicción social será la encargada de resolver la cuestión principal del asunto.

La Ley 36/2011 reafirma la competencia de la jurisdicción social en su artículo 2.d), haciendo mención a los TRADE en los siguientes puntos<sup>63</sup>:

1. Confiere capacidad y legitimación procesal a los TRADE, en su artículo 16.2 al enunciar que “igualmente tendrán capacidad procesal los trabajadores autónomos económicamente dependientes mayores de dieciséis años”. y a las organizaciones de trabajadores autónomos, en su artículo 17.3 “las organizaciones de trabajadores autónomos tendrán legitimación para la defensa de los acuerdos de interés profesional por ellas firmados”.
2. El intento de conciliación es un requisito previo para acudir a los tribunales, y posibilitando la creación de procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos mediante los AIP, así lo establece en el artículo 63, es necesario indicar que los laudos arbitrales establecidos por los AIP se entenderán equipados a las sentencias firmes a efectos firmes, tal y como señala el artículo 68.
3. Las asociaciones representativas de los TRADE gozaran de ciertas exenciones como de la prestación de cauciones, garantías e indemnizaciones relacionadas con la adopción de medidas cautelares que pudieran acordarse, así se establece en su artículo 79.1.

---

<sup>63</sup>Navarro Nieto, F. (2012) Especialidades del régimen profesional del TRADE en jornada, interrupciones y extinción de la relación contractual. *Temas laborales*, 114. [http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33\\_1325\\_3.pdf](http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/33_1325_3.pdf) página 58

Y por ultimo, en relación a los AIP y el proceso de conflictos colectivos, nos tenemos que remitir al artículo 153 LRJS que establece que “se tramitarán a través del proceso de conflictos colectivos las demandas que afecten a la intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal,(...) convenio colectivo, y de los acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes. Estando legitimados para promover el proceso sobre conflictos colectivos, las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos económicamente dependientes y los sindicatos representativos de estos, para el ejercicio de las acciones colectivas relativas a su régimen profesional, así como las empresas para las que ejecuten su actividad y las asociaciones empresariales de éstas siempre que su ámbito de actuación sea al menos igual al del conflicto” según establece el artículo 154 LRJS. Siendo igualmente necesario para este caso el intento de conciliación o mediación.

## **CONCLUSIONES**

La Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo autónomo (LETA) constituyó un progreso normativo inmenso al ser la primera regulación de este colectivo, y fundamentalmente por la creación de dos figuras novedosas como el trabajador autónomo económicamente dependiente y los acuerdos de interés profesional, pese a las numerosas lagunas existentes en su regulación.

El RD 197/2009, de 23 de febrero, vino a desarrollar esta ley, pese a que reguló el contrato entre el TRADE y el cliente principal, no fue capaz de regular y desarrollar el resto de las cuestiones suscitadas en la LETA. Es necesario mencionar la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción social que vino a modificar la LETA, incorporando entre otros aspectos el artículo 11 bis LETA y la obligación de informar al cliente principal de la situación de dependencia que se encuentra el TRADE frente a él.

La figura del TRADE se engloba dentro del trabajador autónomo, siendo necesario que cumpla los requisitos específicos del artículo 1.1. LETA, considerándose ambos como trabajadores por cuenta propia. No obstante, existen grandes diferencias entre ambas figuras, y bajo mi punto de vista la principal problemática de esta figura radica en la contradicción en sí misma que constituye el trabajador autónomo económicamente dependiente, siendo todo lo contrario al trabajador autónomo al percibir de su cliente principal al menos el 75% de sus ingresos.

Indudablemente la dependencia económica no es el único rasgo definitorio del trabajador autónomo, así el artículo 11.2 LETA establece una amplia lista de requisitos tales como la prohibición de contratar a otros trabajadores por cuenta ajena, la diferenciación del resto de trabajadores por cuenta ajena al realizar su actividad profesional, desarrollar su actividad con criterios organizativos propios e infraestructura propia, y recibir la contraprestación económica de su actividad laboral en función del resultado, asumiendo los riesgos y ventura.

El cliente principal se encuentra en una situación muy ventajosa frente al TRADE por diversos motivos tales como la obligación de comunicar al cliente principal la dependencia económica que tiene hacia él; además de la desprotección a la que hace frente el TRADE en diversas circunstancias tales como situaciones de cese de actividad, descanso por nacimiento o adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento familiar, incapacidad temporal, entre otras medidas.

Los acuerdos de interés profesional (AIP) regulan la mayoría de los aspectos que integra el régimen profesional del TRADE, en mi opinión ampliando y mejorando las condiciones establecidas en la LETA y seguramente las que se pactarían en un contrato individual, al ser negociados para un colectivo de trabajadores

Si bien, me resulta curioso que los AIP tengan eficacia personal, afectando únicamente a las partes firmantes o a los afiliados a sindicatos o asociaciones firmantes que hayan prestado consentimiento; y no general como los convenios colectivos que resulta más beneficioso para los trabajadores al beneficiarse de cualquier mejora pactada. No siendo esta la única peculiaridad que desprenden los AIP, al exigir al TRADE un doble consentimiento para que el acuerdo tenga eficacia, frente al empresario que solo tendrá que prestar una vez su consentimiento para que este sea válido.

Por último, pese a las distintas remisiones al ordenamiento civil, la jurisdicción encargada de aplicar, interpretar, juzgar y garantizar el desarrollo de la actividad del TRADE, es la jurisdicción social; siendo de gran importancia la jurisprudencia sobre las cuestiones suscitadas por este colectivo como la sentencia del caso Glovo o Panrico.

## **BIBLIOGRAFÍA**

Aguilar Martín, M.C (2015). El régimen jurídico del trabajador autónomo económicamente dependiente (1a ed.). Editorial Comares.

Riesco Sanz, A. 2016. “Trabajo, independencia y subordinación. La regulación del trabajo autónomo en España”, Revista Internacional de Sociología, 74 (1): e026. Doi: <http://dx.doi.org/10.3989/ris.2016.74.1.026>

Landaburu Carracedo, M. A. J. (2008). Presente y futuro de los trabajadores autónomos a partir del contenido de la ley 20/2007, del estatuto del trabajo autónomo. Revesco, 96, 49-88. <https://eprints.ucm.es/47343/1/2008-96%2849-88%29.PDF>

Casas, B. J. J. (2018, 2 octubre). El régimen especial de trabajadores autónomos medidas de fomento y promoción. Universitat Abat Oliba CEU. <https://recercat.cat/handle/2072/333566>

Monereo Pérez, J.L y Fernández Avilés, J.A. El estatuto del Trabajador Autónomo, Comentario a la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.

Gala Duran, C: El ámbito subjetivo de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo.

Hernández Martínez, M: El trabajador autónomo económicamente dependiente.

Eguizabal, R. A., del Rey Guanter, S., & Gala Durán, C. (2007). Comentarios al Estatuto del Trabajo Autonomo (1.a ed.). Lex Nova

Avilés, A. O., Hernández, J. G., & De Val Tena, A. L. (2014). El derecho a la negociación colectiva: Vol. Los acuerdos de Interés profesional de los TRADE. Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.

Navarro Nieto, F: Especialidades del régimen profesional del TRADE en jornada, interrupciones y extinción de la relación contractual. Editorial Temas Laborales núm. 114/2012, páginas 31-59

Barrios Baudor, G., & Apilluelo Martin, M. (2007). Introducción al estatuto del trabajo autónomo (1.a ed., Vol. 1). Thomson aranzadi.

## WEBGRAFÍA

<https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tu-negocio/tipos-autonomos-existen/20181004135845017789.html>

<https://qonto.com/es/tips/freelancers/tipos-de-autonomos>

Social, E. T. D. M. Y. (2020). Ministerio de Trabajo y Economía Social. Ministerio de Trabajo y Economía Social. 2020. [http://www.mites.gob.es/es/Guia/texto/guia\\_2/contenidos/guia\\_2\\_6\\_3.htm](http://www.mites.gob.es/es/Guia/texto/guia_2/contenidos/guia_2_6_3.htm)

Todolí, A. (2020, 5 octubre). Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo sobre los falsos autónomos en Glovo. Argumentos en Derecho Laboral. <https://adriantodoli.com/2020/09/30/comentario-a-la-sentencia-del-tribunal-supremo-sobre-los-falsos-autonomos-en-glovo/>

Rojo, E. (2020). Pues sí, la saga Glovo (y los glovers) merecen un caso práctico. Notas a la sentencia del TS de 25 de septiembre de 2020, que declara la laboralidad, y recordatorio de las sentencias del JS núm. 39 de Madrid de 3 de septiembre de 2018 y del TSJ de Madrid de 19 de septiembre de 2019(y II). El blog de Eduardo Rojo. [http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/10/pues-si-la-saga-glovo-y-los-glovers\\_2.html](http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/10/pues-si-la-saga-glovo-y-los-glovers_2.html)

Acuerdo de interés profesional Panrico. (2009, 14 abril). CCOO.CAT. [https://www.ccoo.cat/pdf\\_documents/panrico\\_aip\\_acord.pdf](https://www.ccoo.cat/pdf_documents/panrico_aip_acord.pdf). Artículo 1.



Ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones. Afiliados por medios por actividad económica y Cúnta Ajena o Propia. Ajuste estacional. <http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/est8/est10/est290/est292/est293>

Fuerza mayor. (s. f.). Wolters Kluwer. Recuperado 2 de febrero de 2021, de [https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAIAAAEAMtMSbF1jTAAAUmJc3NDtbLUouLM\\_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoA4q2LTjUAAAA=WKE](https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAIAAAEAMtMSbF1jTAAAUmJc3NDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoA4q2LTjUAAAA=WKE).

Pérez, A. (2020, 30 septiembre). COVID-19: prórroga de los ERTE por fuerza mayor y de las ayudas a los autónomos hasta el 31 de enero de 2021 y nuevos ERTE por impedimento o limitación de actividad. ICAIB. <https://www.icaib.org/covid-19-prorroga-de-los-erte-por-fuerza-mayor-y-de-las-ayudas-a-los-autonomos-hasta-el-31-de-enero-de-2021-y-nuevos-erte-por-impedimento-o-limitacion-de-actividad/>

Castro Argüelles, M. A. (2012, 12 diciembre). Vista de Los acuerdos de interés profesional: un balance de la negociación llevada a cabo al amparo del Estatuto del trabajo autónomo. <https://revistas.um.es/analesderecho/article/view/139371/136761>. <https://revistas.um.es/analesderecho/article/view/139371/136761> pagina 36 y 37.

Iberley.es. 2021. Principio De Irrevocabilidad Según El Código Civil. <https://www.iberley.es/temas/principio-irrevocabilidad-codigo-civil-59998>.

Ignasi, B. H. R. (2020, 3 noviembre). La duración de la condición de representantes sindicales de los TRADE no se rige por el art. 67.3 ET | Una mirada crítica a las relaciones laborales. una mirada crítica a las relaciones laborales | Por Ignasi Beltran de Heredia Ruiz. Blog de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. <https://ignasibeltran.com/2020/11/03/la-duracion-de-la-condicion-de-representantes-sindicales-de-los-trade-no-se-rige-por-el-art-67-3-et/>

07. La eficacia del contrato - Derecho UNED. (s/f). Recuperado el 26 de enero de 2021, de Isipedia.com website: <http://derecho.isipedia.com/segundo/derecho-civil-ii/derecho-de-contratos/07-la-eficacia-del-contrato>

Iberley.es. 2021. Convenio Colectivo de empresa de DSV ROAD SPAIN, S.A.U.. [online] Available at: <<https://www.iberley.es/convenios/empresa/convenio-colectivo-empresa-dsv-road-spain-1900216>> [Accessed 26 January 2021].

UGT firma con Panrico el primer Acuerdo de Interés Profesional para los autónomos dependientes. (2009, 23 abril). La Cerca - Off Line. <https://www.lacerca.com/noticias/espana/ugt-panrico-acuerdo-autonomos-37467-1.html>

Consejo General del Poder judicial. (2008). Trabajadores autónomos (146.a ed.). Centro de documentación general. página 270

Iberley. El valor de la confianza. (2020, 18 septiembre). Los agentes de seguros como modalidad de trabajadores autónomos económicamente dependientes. Iberley, Información legal. <https://www.iberley.es/temas/agentes-seguros-modalidad-trabajadores-autonomos-economicamente-dependientes-251>

Valdés Alonso, A. (2009). Vista de La regulación del trabajo autónomo económicamente dependiente en la Ley 20/2007: apuntes para un debate. Revesco. <https://revistas.ucm.es/index.php/REVE/article/view/REVE0808330133A/18816>